

42ª REUNION — 2ª SESION EXTRAORDINARIA — DICIEMBRE 7 DE 1954

Presidencia del doctor Antonio J. Benítez y de la señora Delia D. Degliuomini de Parodi

Secretarios: doctores Rafael V. González y Eduardo T. Oliver

Prosecretarios: doctores Roberto J. Murano y Enrique A. Pardo

DIPUTADOS PRESENTES:

ACOSTA, Policarpo
ACUÑA, Judith Elida
AGÜERO, Teodomiro de la Luz
ALBARELLOS, Juan
ALBERTELLI, Pedro A. F.
ALENDE, Oscar Eduardo
ALONSO, José
ALVAREDO de BLANCO SILVA, Obdulia
ÁLVAREZ, Magdalena
ARGUMEDO de PEDROZA, Celfa
ARIAS, Jesús Pablo
ASTORGANO, José
BALBI, Aimar A.
BELNICOFF, Manuel
BENITEZ, Antonio J.
BIDEGAIN, Oscar R.
BIONDI, Josefa
BLASI, Héctor A.
BRIGADA de GÓMEZ, Josefa Dominga
BRIZUELA, Juan Francisco
BUSTOS FIERRO, Raúl C.
CAMPANO, Guillermo M.
CÁMPORA, Héctor J.
CAMUS, E. P.
CANTORE, Luis
CARBALLIDO, Dorindo
CARENA, Ezio Armando
CARRERAS, Ernesto
CARRIZO, Francisco Isidro
CASTAGNINO, Héctor
CASTRO, Orlando
CASUCCIO, María Elena
CLEMENT, Fernando Abel
CHALUP, Hugo del Valle
DACUNDA, Angélica E.
DA ROCHA, Alejandro J.
DEGLIUOMINI de PARODI, Delia D.
DEGREEF, Juan Ramón
DEIMUNDO, Antonio J. C.
DEL RÍO, Arturo R.
DE PRISCO, Guillermo
DÍAZ DE VIVAR, Joaquín
DISKIN, David
D'JORGE, Luis
DOMÍNGUEZ, Carlos Joaquín
DOMÍNGUEZ, Roberto
DUSSAUT, Santiago
FASSI, Santiago Carlos
FERNÁNDEZ, Expédito
FERNÁNDEZ, Hernán S.
FLORES, Francisca A.
FONTANA, Alfredo
FORTEZA, Eduardo J.
GALLO, Luis M.
GARCÍA, Juan C.
GIANOLA, Jorge N.

GOBELLO, José
GOITIA, Carlos Inocencio
GÓMEZ, Manuel Vicente
GOMIS, Pedro A. J.
GONZÁLEZ, Antonio F.
GONZÁLEZ, Ventura
GRAMAJO, Rodolfo
GRO, Carlos
HERMIDA, Antonio
IDOMANICO, Humberto
LABANCA, Enrique V.
LANFOSSI, Adolfo
LANNES, Héctor L.
LOGUERCIO, Dante N.
LÓPEZ, Gerardo
LÓPEZ, Noé
LÓPEZ, Pablo
LÓPEZ, Plácido Guillermo
LUNA, Pedro Antonio
MACABATE, Manuel E.
MACRI, Ana Carmen
MAESTRO, José Ángel
MARCÓ, Teodoro E.
MARTÍNEZ, Darwin
MATTIS, Eduardo
MERLO, Patrocinio
MESSINA, Bernardo R. A.
MIEL ASQUÍA, Ángel J.
MIGUEL de TUBIO, Josefa
MONTES, Abel
MORESCHI, Humberto P.
MOYA, Isaac Donald
MUSACCHIO, Miguel
NUDELMAN, Santiago I.
ORDÓÑEZ PARDAL, Pedro A.
ORLANDI, Eómulo E.
OSELLA MUNOZ, Enrique
OTERO, Pedro Ramón
PALLANZA, Adolfo
PELLERANO, Jorge S.
PERALTA, Ángel Enrique
PERETTE, Carlos H.
PÉREZ, José C.
PÉREZ OTERO, Tito V.
PERICAS, Luis
PICERNO, José E.
PIOVANO de DE CASTRO, Mafalda
POSADA, José B.
PRACÁNICO, Zulema N.
PRESTA, José
PRESTE, Pascual N. H.
RABANAL, Francisco
RINALDI, Luis
ROCAMORA, Alberto L.
ROCHE, Luis Armando
RODRÍGUEZ de COPA, Seferina del C.
ROUGGIER, Valerio S.
RUMBO, Eduardo I.

SAINZ, Héctor Agustín
SALABER, Carmen
SALVO, Hilario F.
SANTUCHO, Oscar D.
SCANDONE, Eduardo Ernesto
SIBOLDI, Agustín
SPACHESI, Modesto A. E.
TEJADA, Beato Miguel
TEJADA, María Urbelina
TESORIERI, José V.
TOFANELLI, Oreste
TOMMASI, Victorio M.
TORTEROLA de ROSELLI, Isabel A.
ULLOA, José Manuel
VERGARA, Amando
VILLAFANE, José María
VILLA MACIEL de CANO, Otilia
WEIDMANN, Rodolfo A.
ZEREGA, Oreste A.

AUSENTES, CON LICENCIA:

DI BERNARDO, Almerindo D.
GAETA de ITURBE, Dora Matilde
RODRÍGUEZ, Celina E.
VILLARREAL, Pedro

AUSENTES, CON AVISO:

AGUILAR de MEDINA, Generosa D.
ALBRIEU, Oscar E.
ARGANA, José María
ATALA, Luis
CAVIGLIA de BOEYKENS, María C.
COBELLI, Francisco
ESPEJO de RAMOS, Juana Alicia
FERRER ZANCHI, Alfredo G.
LATELLA FRÍAS, Donato
MORENO, Silverio
PARINO, Edmundo
PAZ, Edvino Alfredo
RODRÍGUEZ, Manuel Félix

DELEGADOS PRESENTES:

BARRERA, Néctar A.
ESCARDÓ de COLOMBO BERRA, P.
FADUL, Esther M.
FERNÍCOLA, Elena A.
MARINO, Ramón
MONTANA, Agapito
PAROLÍN, Orlando L.
RIOS, Octavio A.
RODRÍGUEZ GALLARDO, Alberto
SAN MARTÍN, Pedro J.

AUSENTE, CON AVISO:

POLO, Antenor

SUMARIO

1.—Enarbolamiento de la **bandera nacional**. (Página 2436.)

2.—Asuntos entrados:

I.—Mensaje y proyecto de ley del Poder ejecutivo: **presupuesto del distrito federal**. (Página 2436.)

II.—Mensaje del Poder Ejecutivo con el que remite copia del decreto que autorizó la **transferencia** de una fracción de tierra fiscal a la provincia de Santiago del Estero. (Página 2442.)

III.—Comunicaciones del **Honorable Senado**. (Pág. 2443.)

IV.—Despachos de **comisión**. (Página 2443.)

V.—**Peticiones particulares**. (Página 2443.)

VI.—Proyecto de ley del señor diputado **Ferrer Zanchi** y otros: **exención de impuestos**, tasas y contribuciones a la Casa de la Empleada y al Hogar de la Empleada «Santa Teresita». (Página 2443.)

VII.—Proyectos de **resolución** y de **declaración** en la mesa de la **Honorable Cámara**:

1.—Del señor diputado **Nudelman**: **solidaridad con estudiantes detenidos**. (Página 2443.)

2.—Del señor diputado **Nudelman**: **declaración** relativa a la situación de **ciudadanos guatemaltecos**. (Página 2443.)

3.—Del señor diputado **Nudelman**: **pedido de informes** relativos a las obras de construcción de un ramal ferroviario de Zapala a Chile. (Página 2443.)

4.—Del señor diputado **Ferrer Zanchi**: **pedido de informes** relativos a negociaciones celebradas con la Atlas Corporation para la explotación de petróleo. (Página 2443.)

5.—Del señor diputado **Ferrer Zanchi**: **pedido de informes** relativos a la circulación de un periódico de la Capital Federal. (Página 2444.)

6.—Del señor diputado **Perette**: **pedido de informes** referentes al plan de construcción de clubes deportivos. (Página 2444.)

7.—Del señor diputado **Perette** y otros: **ampliación de la convocatoria a sesiones extraordinarias**. (Página 2444.)

8.—Del señor diputado **Alende**: **declaración** referente a la **libre circulación** de un periódico de Mercedes, San Luis. (Página 2444.)

3.—Concédese **licencia** para **faltar a sesiones** a la señora diputada **Alvaredo de Blanco Silva** y al señor delegado **Polo**. (Página 2444.)

4.—**Homenaje** a la memoria del diputado nacional electo doctor **Fernando Irastorza**. (Página 2444.)

5.—**Homenaje** a la memoria del doctor **Luis Agote**. (Página 2445.)

6.—**Moción** del señor diputado **Miel Asquía** de preferencia para el proyecto de ley de reformas al **régimen impositivo**. (Página 2446.)

7.—**Consideración** del despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley a que se refiere el **número 6** de este sumario. (Página 2448.) Se sanciona.

8.—Apéndice:

I.—**Sanciones** de la **Honorable Cámara**. (Página 1477.)

II.—**Inserciones**. (Página 2490.)

—En Buenos Aires, a los siete días del mes de diciembre de 1954, a la hora 8 y 10:

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Benítez). —Queda abierta la sesión con la presencia de 82 señores diputados.

Invito al señor diputado por Buenos Aires doctor **Miguel Musacchio**, por corresponderle en la nómina alfabética, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los señores diputados y delegados y los concurrentes a las galerías, el señor diputado **Musacchio** iza la bandera nacional (*Aplausos prolongados*).

2

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Benítez). — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

I

Buenos Aires, 2 de diciembre de 1954.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad para someter a su consideración el proyecto de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para los ejercicios de 1955 y 1956, a los efectos de dar cumplimiento a la preceptación contenida en el artículo 68, inciso 28, de la Constitución Nacional.

para el reconocimiento de todos los argentinos y de la humanidad entera.

El sector de la Unión Cívica Radical adhiera al emocionado recuerdo de este insigne maestro.

Sr. Presidente (Benítez). — Invito a las señoras y señores diputados, a las señoras y señores delegados y al público asistente a las galerías a ponerse de pie en homenaje a la memoria del doctor Luis Agote.

—Pónense de pie los señores diputados y el público asistente a las galerías.

6

MOCION

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Miel Asquía. — Como ya se ha expedido la Comisión de Presupuesto en el proyecto de ley de reformas al régimen impositivo, hago indicación de que se pase a la orden del día.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — El sector radical se va a oponer a la proposición del señor diputado por la Capital por varias razones.

En primer término entiende nuestro sector, consecuente con la actitud asumida ayer en la Comisión de Presupuesto, que este proyecto debe ser considerado en relación a tres asuntos que tienen íntima vinculación: la unificación de impuestos, el régimen aduanero y el presupuesto.

Esos proyectos deben ser considerados por la Cámara una vez que la Comisión de Presupuesto los haya estudiado en forma conjunta y orgánica, porque se trata de cuatro iniciativas referentes a problemas económicos y financieros del país y estrechamente relacionados con el costo de la vida, con los bienes de consumo, con la inflación y la desvalorización monetaria.

Así lo planteamos ayer en la Comisión de Presupuesto y algunos de sus miembros reconocieron la validez de nuestra argumentación, pero dejaron que fuese esta Cámara el tribunal que en definitiva resolviera el ordenamiento del trabajo.

En el día de ayer, a las 19 horas, fué entregado a los representantes de la oposición el proyecto de presupuesto para el año próximo. Entendemos que el Poder Legislativo no puede convertirse en un simple «eco» del Poder Ejecutivo y en una fábrica desordenada de hacer leyes.

Por ello sostenemos concretamente, como cuestión previa, que la Cámara no debe tratar ninguna de estas leyes impositivas, sin que previamente la Comisión de Presupuesto encarere todos esos problemas económicos y financieros en con-

Además nos oponemos a la proposición del señor diputado presidente del sector de la mayoría, porque implica el desplazamiento de la hora de proyectos de declaración y resolución que estatuye nuestro reglamento. Ya en el período ordinario de sesiones hemos reclamado la vigencia de esta etapa reglamentaria que da oportunidad para que se planteen problemas vitales para el país. Así, de consagrarse este principio que sostiene el señor diputado, se impediría que los legisladores promuevan la inclusión de nuevos asuntos, aun los considerados vitales, en las sesiones extraordinarias.

El sector radical propició hoy un reclamo ante el Poder Ejecutivo para la inclusión de diversos asuntos para su consideración en sesiones extraordinarias.

Entendemos, por ejemplo, que debe considerarse la situación de más de 200 estudiantes presos —de ambos sexos— y la de centenares de presos políticos, sociales y militares. Debe tratarse el estado de guerra interno y la aplicación de legislación represiva del pensamiento libre; como sostenemos la defensa del petróleo argentino y el rechazo de todo convenio privado con el denominado consorcio Mr. Odium-Jorge Antonio, que implicará un serio quebranto para la independencia y soberanía del país.

Reclamamos la vigencia del derecho de reunión, de la libertad de prensa, de la circulación de los diarios, de la libertad de culto, libertad religiosa y de conciencia, como debe contemplarse la situación del auténtico Partido Socialista, injustamente privado de su personería, locales e imprenta, y perseguidos implacablemente sus hombres, y todo lo relativo a evitar los despojos a instituciones deportivas, como el caso de Estudiantes de Paraná, víctima de un zarpazo por parte del poder administrador. Exigimos la reincorporación de maestros, profesores, empleados y obreros separados de sus cargos en 1946 por causas políticas o gremiales. También propiciamos la reforma a la ley 9.688 para adaptarla a las necesidades de la hora, aumentando el monto de 6.000 pesos actualmente estipulado como máximo de indemnización, en forma que se valore debidamente la vida humana; la reforma a la ley de maternidad; la aplicación de la ley 11.729 a los empleados y obreros del Estado y la sanción del Código Social, que contemple la situación de los trabajadores en todos los ciclos de la existencia humana, etcétera.

Entendemos que la proposición del señor presidente del bloque de la mayoría, doctor Miel Asquía, debe ser rechazada por dos razones: en primer término, porque este proyecto debe considerarse en relación con todos los problemas económicos y financieros a que se vinculan los otros cuatro proyectos previamente estudiados por las comisiones, y, en segundo lugar, porque implica el desplazamiento de la hora destinada

a proyectos de resolución y de declaración, que debe mantenerse en toda su vigencia, porque así lo imponen los problemas económicos, políticos e institucionales que preocupan al país y que deben merecer la atención del Parlamento.

Entendemos de este modo que no participamos ni nos complicamos en un sistema de legislación que es contrario a normas orgánicas y a un Parlamento regularmente constituido.

Por eso defendemos la vigencia de principios fundamentales vinculados a derechos humanos, a la libertad de ideas, a la libertad de radio, a la libertad religiosa. Rechazamos toda idea de negociación con el petróleo argentino, porque ese consorcio de Mr. Odium con Jorge Antonio, presentado por el oficialismo ostentosamente como el rey de los Mercedes Benz, como el rey de los donantes de millonadas, rey de exportaciones y ahora será rey del petróleo argentino, como rechazamos todo convenio sobre el petróleo con empresas privadas...

Sr. Presidente (Benítez). — El señor diputado por Entre Ríos plantea una situación completamente ajena al asunto en debate.

Sr. Perette. — Insisto nuevamente en el planteo hecho por el sector radical al iniciarse la primera sesión del período extraordinario.

Fijamos nuestro criterio demostrando nuestra preocupación y deseo de que se apruebe un sistema impositivo justo y equitativo, y reclamamos también la atención de problemas fundamentales para el país.

Consideramos contraproducente la consideración de un asunto como este del régimen tributario sin que el Parlamento haya entrado a considerar el proyecto de presupuesto que es la ley de las leyes.

Por todas estas razones, el sector radical deja fijada su posición y ratifica su postura inquebrantable al servicio del progreso, de la libertad y de la justicia entre los argentinos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Fernández (H. S.). — Las palabras del señor diputado por la minoría carecen de todo sentido para fundamentar su opinión contraria a que se trate de inmediato el proyecto despachado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda relacionado con las leyes impositivas.

Ya en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el señor diputado por Entre Ríos planteó la cuestión de que los proyectos relativos a impuestos y a presupuesto general debían ser estudiados conjuntamente.

El diputado que habla apuntó al señor diputado que el Poder Ejecutivo, que es el autor de esos proyectos, es el que ha hecho un estudio integral de esas materias; y que una vez estudiadas y maduras esas iniciativas las envía al Honorable Congreso para su consideración. Pero eso no quiere decir que la Honorable

Cámara ha de exigir a la Comisión de Presupuesto que haga un estudio conjunto de todos esos asuntos, formule despacho e informe luego a este cuerpo, que trabaja en forma completamente diferente a la de la comisión.

En la comisión se han estudiado los proyectos conjuntamente —así lo habrán hecho también particularmente cada uno de sus miembros— porque se trata de materias íntimamente vinculadas entre sí, que integran un todo; pero eso no significa que la Honorable Cámara deba considerar esas iniciativas en conjunto. Dentro del ordenamiento del trabajo de la Cámara debemos tratar sucesivamente los diversos proyectos.

No hay, pues, razón alguna para postergar la consideración de un proyecto despachado por la comisión y paralizar el trabajo de la Cámara hasta que estén despachadas todas las iniciativas.

En segundo lugar, el señor diputado sostiene que la Cámara debe estudiar una cantidad de asuntos no incluidos en la convocatoria a sesiones extraordinarias. Me permito destacar que es erróneo el planteamiento del señor diputado.

Al convocar a sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo —artículo 83, inciso 12 de la Constitución Nacional— hace uso de una facultad que le es absolutamente privativa. Es ya tradición y jurisprudencia parlamentaria que en las sesiones extraordinarias se traten solamente los asuntos que fije expresamente el Poder Ejecutivo. Los asuntos a que se ha referido el señor diputado de la oposición serán estudiados en el momento oportuno y no en estas sesiones extraordinarias, en las cuales, de acuerdo con el texto constitucional, debemos tratar pura y exclusivamente los asuntos fijados por el Poder Ejecutivo.

El señor diputado, pues, está solicitando a la Honorable Cámara algo que no puede ser favorablemente resuelto. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Perette. — Lamento que no acepte las interrupciones.

Nuestro planteo tiene sentido, pues reclamamos la inclusión de asuntos; y en la Comisión de Presupuesto la mayoría reconoció nuestra impugnación al trabajo legislativo.

Sr. Alonso. — Pido la palabra para formular una moción de orden.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alonso. — Hago moción de que se cierre el debate.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por la Capital.

94 señores diputados.

—Resulta afirmativa de 89 votos; votan

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar la moción de que se pase a la orden del día.

— Resulta afirmativa de 89 votos; votan 94 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a pasar a la orden del día.

7

REFORMAS AL REGIMEN IMPOSITIVO

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre reforma al régimen tributario nacional; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja su aprobación con las siguientes modificaciones:

- I) Art. 2º — Agrégase al apartado 5 a continuación del inciso g), lo siguiente:

«Cuando se trate de las cooperativas denominadas de trabajo, será de aplicación lo dispuesto en el inciso f) del artículo 60.»

- II) Art. 2º — Agrégase al apartado 9 el siguiente inciso:

«f) de los servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas aludidas en la última parte del inciso g) del artículo 45, que trabajen personalmente en la explotación, inclusive el retorno percibido por aquéllos.»

- III) Art. 7º — Apartado 10, inciso b), del artículo 111:

Suprímese la palabra «ónix».

- IV) Art. 10. — Apartado 2: Substitúyese el artículo 19 por el siguiente:

«Art. 19. — Notificado el propietario de la consignación, declarará el juez transferida la propiedad, sirviendo el auto y sus antecedentes de suficiente título traslativo, el que deberá ser inscrito en el Registro de la Propiedad. Dicho auto se comunicará al Tribunal de Tasaciones con una antelación de veinte (20) días por lo menos a la fecha en que se ha de otorgar la posesión judicial del bien expropiado.»

Sala de la comisión, 6 de diciembre de 1954 (1).

Juan Ramón Degreef. — Hernán S. Fernández. — Jesús Pablo Arias. — Carlos Joaquín Domínguez. — Expédito Fernández. — Elena A. Fernicola. — Antonio Hermida. — Plácido Guillermo López. — Humberto P. Moreschi. — Mafalda Provano de De Castro. — Eduardo I. Rumbo. — María Úrbelina Tejada.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Degreef. — En nombre de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable Cámara debo informar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sobre reformas a introducir al actual régimen tributario nacional.

A modo de introducción, y antes de entrar al análisis de esta importante iniciativa del Poder Ejecutivo, quiero poner de relieve el profundo contenido social de la reforma impositiva que consideramos, así como también la sólida congruencia que se pone de manifiesto entre sus distintos aspectos y, por último, la armonía de un plan que tiende a introducir un ponderable mejoramiento en la técnica de la aplicación y percepción de los gravámenes, todo ello firmemente orientado hacia un continuo perfeccionamiento de nuestro régimen fiscal y financiero.

A nosotros los peronistas, a los ciudadanos de bien, a los habitantes equilibradamente apasionados por la cosa pública esta modalidad de la reforma tributaria que se proyecta no puede extrañar.

Es la lógica y natural consecuencia del cumplimiento de un plan destinado a satisfacer aquel nuestro pristino anhelo convertido en estribillo y a veces en *slogan* de «menos ricos y menos pobres» que en el fondo no es otra cosa que la esencia misma del Justicialismo y la razón de ser de la tercera posición, hoy verdadera doctrina de un mundo futuro, pues sus principios hace mucho que han desbordado espiritual e intelectualmente los límites de nuestra generosa Nación.

Entrando ya en materia, del análisis del mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo podemos deducir que se inspira en siete principios fundamentales y que la mecánica de su articulado se desarrolla en nueve capítulos que comprenden catorce puntos de reforma, por medio de los cuales se satisfacen totalmente los postulados contenidos en los siete principios mencionados como inspiración de la reforma, y que son los siguientes:

Primero, cumplimiento de una política impositiva justicialista utilizando la función del impuesto como instrumento de gobierno al servicio del pueblo a la par que de la economía social del país.

Segundo, adecuación del régimen fiscal a la orientación de la política económico-financiera que a partir del año 1946 viene cumpliéndose por etapas y en la medida que lo permiten la capacidad tributaria, la necesidad rentística y la potencialidad económica del pueblo y de la Nación.

Tercero, redistribución de la carga fiscal en justa relación con la capacidad tributaria y la potencialidad económica privada.

(1) Véase el mensaje del Poder Ejecutivo y proyectos de ley en la página 2386, y siguientes del Diario de Sesiones.

Cuarto, desgravación proporcional de los réditos del trabajo personal y de los artículos de consumo más indispensables, enervando la presión tributaria y procurando la equilibrada incidencia en las masas menos dotadas económicamente.

Quinto, capitalización nacional porque no se busca compensar la merma de la renta por desgravación de determinados impuestos por el alza de otros sectores del sistema impositivo. El equilibrio se logrará estimulando el desarrollo de actividades económicas, perfeccionando el sistema de percepción del impuesto, impidiendo cada vez más la evasión maliciosa o involuntaria; y gravando actividades o bienes injustamente liberados o insuficientemente sujetos a impuesto.

Sexto, contención en los gastos públicos: la constante relación matemática y armonía lógica que debe regir entre el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos hace imperioso el cumplimiento de normas de contención y parsimonia en el presupuesto de gastos y, a este efecto, se vienen operando transformaciones en el ordenamiento de la administración nacional, que se han traducido en forma concreta en las normas de racionalización, planificación y economías contenidas en los respectivos decretos del Poder Ejecutivo. Bastará decir a modo de ejemplo que las medidas citadas, en un solo aspecto de la reorganización racional de los servicios a cargo del Estado, han producido una apreciable economía sin apelar a medidas extremas, y con sólo dejar jugar la automática amortización de vacantes, el gobierno ha podido aligerar el peso de casi veinte mil cargos o empleos al presupuesto de la administración pública nacional.

Séptimo, perfeccionamiento del régimen fiscal. Todo el articulado del proyecto, que ha sido objeto en su preparación de una selectiva y bien meditada técnica económico-financiera, tiende al mejoramiento del actual régimen fiscal, poniéndolo al día con los principios más avanzados que rigen la evolución, universalmente reconocida de la ciencia y la técnica económico-financieras.

Bien, señor presidente y señoras y señores diputados: la palabra del Poder Ejecutivo contenida en el mensaje me exime de la poco grata tarea de fatigar más vuestra atención, con el análisis de estos siete principios que resaltan hasta la evidencia de la simple lectura de sus distintos párrafos. Creo, por otra parte, que es por todos reconocida la modalidad del Poder Ejecutivo de presentar estos planteos y concretar sus iniciativas con una claridad y concisión tales que facilitan y abrevian el proceso de estudio, consideración y sanción de los proyectos que envía al Honorable Congreso.

La parte dispositiva del proyecto contiene, como ya he dicho anteriormente, nueve capítu-

los, dentro de los cuales están contenidas metódicamente las modificaciones que se proyectan al régimen tributario nacional.

En esta parte del informe, y como por otra parte corresponde, sólo me referiré en general a las reformas que contiene cada uno de los siguientes capítulos, siguiendo el método del proyecto: 1º Ley de procedimientos; 2º Impuesto a los réditos; 3º Impuesto a los beneficios extraordinarios; 4º Impuesto a las ganancias eventuales; 5º Impuesto a las ventas; 6º Impuestos internos; 7º Contribución inmobiliaria; 8º Impuesto de sellos, y 9º Derechos de inspección de sociedades anónimas.

Cuando se trate en particular, me he de referir en forma especial a las modificaciones que se introducen en el articulado de cada uno de esos nueve capítulos. En esa oportunidad, si la Honorable Cámara lo considera necesario, luego de comparar el texto vigente con las modificaciones que se proyectan, daré los fundamentos de estas últimas y formularé las observaciones pertinentes.

Con este propósito y para este objeto he hecho preparar un cuadro comparativo con las observaciones correspondientes, y desde ya pido autorización a la Honorable Cámara para que sea insertado en el Diario de Sesiones de la reunión de la fecha, por entender que el interés público general debe ser satisfecho mediante el fácil acceso al conocimiento y divulgación de los textos y, además, al espíritu y fundamento técnico fiscal de la reforma, sin olvidar que en esta materia, quizá más que en otras, tiene gran importancia que el pueblo contribuyente cuente con una inequívoca fuente para la futura interpretación de la ley.

El capítulo I del mensaje del Poder Ejecutivo se refiere a las modificaciones que han de introducirse a la ley de procedimientos. El texto ordenado en 1952 de la ley 11.683 contiene el régimen procesal para la aplicación, percepción y fiscalización de los gravámenes.

En este capítulo se proyectan tres modificaciones, dos de ellas que hacen al fondo del sistema y la tercera es puramente formal.

La primera modificación consiste en llevar el tope de recargo del artículo 42, de 20 por ciento después de tres meses, cualquiera sea el lapso de la mora, al juego de una escala gradual de recargos que lleva el recargo del 5 por ciento al 100 por ciento después de los cinco años.

El fundamento de la reforma es más que fiscal, racional y equitativo. La benignidad del sistema actual determina situaciones como éstas: hay quienes especulan en alcanzar los diferentes términos actuales de la prescripción porque el riesgo es mínimo y hay también quienes lo consideran un verdadero negocio el esperar la sanción de la multa actual, pues el precio pagado por este concepto resulta menor que el precio pagado por el interés de un capital tomado en préstamo bancario o de particulares.

A la lenidad del sistema actual, debe oponerse un régimen penal fiscal de naturaleza resarcitoria e intimidatoria a la vez. Cuando no quepa la esperanza especulativa de la prescripción fácil o la certeza de un negocio seguro, por la diferencia de intereses de los capitales remisos o evadidos, el fisco cobrará oportunamente la casi totalidad de estos impuestos. En esto consiste la modificación del artículo 42 de la ley 11.683, texto ordenado en 1952. El agregado al artículo 51, deja sin efecto las sanciones de los artículos 43, 44 y 45, en caso de fallecimiento del infractor aunque haya resolución firme o cosa juzgada.

La segunda modificación consiste en llevar los diferentes, injustos e imprecisos términos de la prescripción actual de 2 y 5 años, a cinco. Se logra así evitar discusiones en cuanto al término que corresponde a tal tipo de infracción y se igualan los derechos del fisco y los del infractor, posibilitando la compensación por créditos recíprocos.

La tercera modificación hace al perfeccionamiento de la mecánica en la aplicación de los gravámenes y del procedimiento administrativo y judicial, de conformidad con las prescripciones de la ley 14.184, objetivos XXII, G. 7 y E. 17.

El capítulo II del mensaje contiene las modificaciones a introducir en la ley de impuesto a los réditos 11.682, texto ordenado en 1952. Sin perjuicio de considerar en detalle las modificaciones durante el tratamiento en particular, será útil para formar una mejor opinión destacar ahora los aspectos más fundamentales de la reforma.

Son ellos: 1º) el aumento de las sumas deducibles como mínimo no imponible; 2º) adicional por cargas de familia; 3º) adicional por rentas de cuarta categoría; 4º) nueva escala adicional del gravamen; 5º) aumento de amortizaciones extraordinarias; 6º) unificación del impuesto a las sociedades de capital; 7º) la exención total a los intereses de depósitos en cajas de ahorros, y 8º) el tratamiento de las actividades de corredores, viajeros y despachantes de aduana.

Los actuales mínimos no imponibles de 3.600 y 6.000 pesos, se uniforman y fijan en 7.200 pesos, por considerar que siendo destinados a sufragar gastos imprescindibles deben ser comunes a todos los contribuyentes.

El adicional por cargas de familia se eleva de 1.500 a 2.400 pesos. Por cónyuge, hijos y otras cargas se eleva a 2.400 pesos para el primero y 1.800 pesos para los restantes. Además, se eleva de 12.600 a 15.000 pesos anuales la deducción por réditos del trabajo personal.

La nueva escala progresiva de la tasa adicional, alivia a las rentas pequeñas y medianas, pues se aplicará sobre los réditos netos imponibles que excedan de 10.000 pesos, en vez de

5.000 pesos, como hasta ahora, sin variar el tope máximo actual del 33 por ciento.

Estas medidas significan un esfuerzo tributario menor que el actual para los contribuyentes con renta neta imponible de hasta 80.000 pesos; y para los que se excedan la incidencia será de poca importancia al no variar la tasa promedio del gravamen. Así, un contribuyente con familia tipo, casado y con dos personas a su cargo, con réditos netos de hasta 150.000 pesos anuales, pagará menos impuesto que en la actualidad.

Con respecto al aumento de amortizaciones extraordinarias, no sólo se refieren a las actuales, sino que se establecen otras para los años 1951, 1952 y 1953, en la forma que se verá al considerarse en particular.

Y sin perjuicio de este incremento de amortización, se lo hace extensivo, por vía de deducción, a los beneficios extraordinarios y se deroga el régimen de «fondo de reposición» por su escaso significado, 20 por ciento más que la amortización ordinaria, y por su excesiva complejidad.

Para las sociedades de capital se simplifica el sistema y se las equipara al que correspondería a únicos dueños y sociedades de personas, gravándoles sus beneficios con la totalidad del impuesto en el ejercicio que se obtenga. Se unifican las tasas actuales en el 30 por ciento y se suprime la retención sobre dividendos, ya que el impuesto recaerá así unificado sobre la utilidad sujeta a gravamen, se distribuya o quede en la sociedad.

Con el propósito de estimular más aún la práctica del ahorro y de fomentar las inversiones en títulos mobiliarios, actividades ambas que han llegado a índices jamás logrados durante este gobierno, se proyecta substituir la exención parcial vigente por la liberación total del impuesto.

En lo atinente a los comisionistas, corredores y despachantes de aduana, se transfieren los réditos de su actividad a la cuarta categoría, gozando así de mejor tratamiento tributario.

Muchos otros aspectos de mejoramiento técnico y de desgravación, serán considerados y explicados durante la discusión en particular, como por ejemplo el caso de las cooperativas, donde se hará una diferencia fiscal entre las de producción y consumo.

El capítulo III del proyecto se refiere al impuesto a los beneficios extraordinarios. Merece destacarse la modificación contenida en el artículo 4º del proyecto, mediante la cual se extiende este gravamen a las amortizaciones extraordinarias permitidas. Se suprime así la deducción de un importe equivalente a las amortizaciones ordinaria de inversiones de activo fijo realizadas con posterioridad al 1º de enero de 1940. Se logrará así una sola deducción por iguales conceptos y se dará tratamiento equitativo a las empresas nuevas en relación con las más antiguas, llevando el mínimo no imponible de 20.000 a 30.000 pesos.

El resto de las modificaciones proyectadas están destinadas al perfeccionamiento del sistema, tendiendo a darle unidad mediante la extensión a este régimen del adoptado para réditos y ganancias eventuales, igualando términos y atendiendo las variaciones que podrían determinarse por la fluctuación económica financiera.

El capítulo IV se refiere al impuesto a las ganancias eventuales. En términos generales, las modificaciones proyectadas han de traducirse también en un ponderable alivio tributario para quienes se encontraren sometidos a este gravamen.

Las principales modificaciones son las siguientes: a) Se eleva de 10.000 a 30.000 pesos el monto anual de ventas de obras de arte o inversiones de lujo, incluyéndose a los automóviles, cuyos beneficios quedan liberados del impuesto; b) En caso de bienes adquiridos a título gratuito se computará como costo el valor fijado para el pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, en lugar del costo que tuvo el bien en manos del causante; c) Deducción adicional en la venta de inmuebles o automóviles, autorizando un aumento en el costo de un 5 % a los transferidos hasta 1945, y en un 10 % desde 1946 a 1953 inclusive; d) Se reprime el fraude, en caso de manifestación de precios de transferencia notoriamente inferiores a los reales, facultando a la Dirección General Impositiva a impugnar dichos precios y ajustarlos a los corrientes en plaza. Además, puede considerar a las partes y terceros intervinientes como incurso en responsabilidad personal y solidaria para el pago del impuesto y la multa prevista en la ley 11.638 para los defraudadores fiscales; e) Por último, en caso de emisión de acciones con prima, el beneficio imponible se fijará por la diferencia entre el valor de colocación y el atribuible en función del capital, ajustado en la misma forma que para los beneficios extraordinarios.

El capítulo V del mensaje se refiere a las modificaciones a introducir en la ley 12.143, del 28 de diciembre de 1934, y que establece el impuesto a las ventas. El país sufría entonces las repercusiones del colapso económico financiero de la crisis de fines del tercer decenio del siglo, y las necesidades financieras, resultado de factores externos e internos, exigían arbitrar recursos, apelando a toda actividad o bien imponible.

No es del caso y mucho menos la oportunidad para analizar a fondo el origen, los fundamentos y la responsabilidad de la incorporación de esta ley a nuestro régimen fiscal. Es, por otra parte, un fenómeno universalmente conocido que una vez incorporada una institución tributaria al sistema fiscal de un país, su eliminación ha de sufrir un proceso lento de paulatinas modificaciones, que tienden primero a determinar sucesivos alivios en la carga

tributaria de los contribuyentes, y luego a la substitución por otro impuesto más racional.

No otra cosa sucedió entre nosotros con los impuestos internos. Ellos fueron creados en un momento de trágico apremio, hace más de medio siglo, con todos los caracteres de un gravamen inconstitucional; y el proceso evolutivo los va transformando en una institución que, en manos del gobierno actual de la República, a través de varias etapas que hoy tienen su mejor concepción en este mismo proyecto del Poder Ejecutivo, los hace jurídica, social y económicamente un buen instrumento de gobierno.

El proyecto del Poder Ejecutivo tiende a dar: 19) una situación de alivio tributario a la Nación dentro de las posibilidades de nuestro sistema rentístico, el momento financiero fiscal y la capacidad contributiva del pueblo, a la espera de una mejor oportunidad para continuar la perfectibilidad fiscal; 29) tiende a dar cumplimiento a fines contenidos en varias leyes de la Nación y decretos del poder administrador, que se concretan prácticamente por medio de este acto legislativo; y 39) se da cumplimiento concreto también a los siguientes objetivos del segundo Plan Quinquenal: XXII, E, 14; XXII, E, 15; XXII, E, 16 y XXII, G, 5.

Los aspectos fundamentales de la reforma son los siguientes: a) Liberación de gravamen a los aceites comestibles; b) Desgravación a la venta de miel de abejas; c) Exención del impuesto a la venta de bloques premoldeados de hormigón; d) Eliminación del impuesto a la venta de toda clase de libros, así como también del papel destinado a su impresión; e) Desgravación definitiva del impuesto a la venta de productos de explotación minera; f) Limitación de la exención a las compras de las cooperativas de consumo; g) Exención del impuesto al suministro de servicios públicos, y a la venta de esos suministros a las empresas que la realicen; h) Unificación en un solo texto —el del artículo 10 del proyecto— de los actuales artículos 10 y 12, manteniendo la tasa del impuesto en ocho por ciento, excepto para la venta de petróleo y sus derivados, que continúan con la tasa del 1,25 por ciento.

El capítulo VI, sobre impuestos internos, se refiere al proyecto de ley de reformas al texto ordenado de 1952 y tiende a la redistribución equitativa y al mantenimiento de un adecuado equilibrio impositivo sobre el consumo, introduciendo al mismo tiempo las mejoras necesarias para el perfeccionamiento técnico del régimen impositivo, de conformidad con el principio fundamental que di como 7º al comienzo de mi exposición.

Las principales reformas propuestas y que serán analizadas más adelante en su oportunidad, en particular, son las siguientes:

a) Aumentos para posibilitar el ajuste de precios de cigarros, cigarrillos y tabacos

para compensar los costos por aumentos en sueldos y salarios, resultantes de los últimos convenios;

- b) Extensión de la sobretasa de \$ 0,085 por litro y grado a todos los alcoholes puros, excepto el alcohol vínico empleado en bodega, que seguirá pagando \$ 0,03 y el alcohol puro, que utilicen en sus preparaciones los establecimientos autorizados, que quedan totalmente liberados de impuesto;
- c) Los demás alcoholes quedarán gravados con la tasa de \$ 0,03, o estarán exentos de ella, según su destino y siempre que se inutilicen para el consumo de boca;
- d) Se elimina el tope máximo de un octavo y medio por litro, por servicio de desnaturalización, el que será fijado en relación al costo real de los servicios;
- e) Se excluye a los hidromeles del impuesto a las bebidas alcohólicas;
- f) Se reemplaza la sobretasa de \$ 0,085 del alcohol contenido en el vino para fabricar vermut y similares, por un estampillado equivalente;
- g) Se convalida la exención a completar la diferencia de tasas de reaseguro de conformidad con el reglamento del estatuto orgánico del Instituto Nacional de Reaseguros;
- h) Uniformación de la tasa del 5 por ciento en todas las etapas de comercialización de los objetos suntuarios, sin perjuicio de desgravarlos cuando tengan otros destinos;
- i) Deducción del precio del envase de la cerveza para el pago del impuesto;
- j) Extensión de la actual franquicia del recauchutado a las cubiertas utilizadas en motonetas, bicicletas, triciclos y juguetes; y
- k) Se reemplaza el impuesto que soportaban los hidromeles de 10 grados o más de alcohol, por otro de hasta \$ 0,50 por litro. Antes estaban equiparados a una bebida alcohólica y se les aplicaba un impuesto proporcionalmente superior a los vinos y sidras, a los cuales se asemeja por su características naturales y organolépticas.

El capítulo VII se refiere al proyecto de modificaciones al régimen de contribución inmobiliaria.

Con el propósito de fomentar la construcción de viviendas y mitigar el alza de los valores inmobiliarios, se rebaja a partir del 1º de enero de 1955 en seis (6) puntos la tasa de la contribución a pagar por las construcciones habilitadas o que hayan sido objeto de revaluación, con posterioridad al 1º de enero de 1952.

Los terrenos baldíos sufrirán un aumento impositivo, llevándose su tasa actual del 20 % al 30 %⁰⁰, a partir del 1º de enero de 1955.

Se exime de esta contribución por diez años a las ampliaciones de vivienda por construcciones en espacios libres, de conformidad con el decreto 14.465/47; y de un tercio del gravamen territorial a las ampliaciones realizadas con posterioridad a la vigencia del mismo decreto.

La exención a los inmuebles de propiedad de la Nación, provincias o Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, está condicionada a que funcionen en ellos dependencias que ejerzan actividades del Estado como poder público.

Se mantiene la exención a las asociaciones mutualistas, pero en cuanto a las sociedades cooperativas se las limita únicamente a las de consumo.

Con referencia a los inmuebles en que funcionen escuelas particulares, se deroga el régimen vigente por ser muy complejo y se reemplaza por otro en que la exención juega en función del número de alumnos a los cuales se les imparte la enseñanza gratuitamente.

Para las viviendas habilitadas a partir del 1º de enero de 1955, se establece la exención por el término de cinco años de un tercio de la contribución inmobiliaria, incluidas las del régimen de la propiedad horizontal, cuya valuación no exceda la que establezca la reglamentación y siempre que sean habitadas por sus dueños.

También a partir del 1º de enero de 1955 las unidades de propiedad horizontal pagarán proporcionalmente igual o menor impuesto que el que pagaban antes de la división, porque este hecho no dará lugar a revaluación y se dejan sin efecto a partir del 1º de enero de 1955 las revaluaciones practicadas.

El plazo para reclamar el pago o la devolución de diferencias de contribución, resultantes de modificaciones introducidas en las propiedades, se amplía a cinco años a partir del 1º de enero del año siguiente de la denuncia de la notificación.

En cuanto a la ley de expropiación 13.264, se establece el plazo de hasta noventa días para que se expida el Tribunal de Tasaciones en vez de los treinta que fija la ley actual, para facilitar, al menos en parte, el cumplimiento de las tareas de este organismo.

Por último, se introduce un agregado que establece que el juez comunicará al Tribunal de Tasaciones el auto traslativo de dominio, veinte días antes de otorgar la posesión del bien expropiado, para que el tribunal pueda verificar su estado a los fines de la tasación. Por este procedimiento se facilita la correcta tasación, pues el tribunal podrá verificar su estado antes de que se introduzcan modificaciones.

El capítulo VIII del mensaje se refiere a las modificaciones que por el artículo 11 del pro-

yecto se introducen en la ley de sellos, texto ordenado en 1952.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, en cuanto a las reformas a introducir en la ley de sellos, puede ser analizada, para su mejor comprensión, atendiendo a los tres aspectos fundamentales u objetivos que ella persigue, y que son los siguientes: a) Simplificar el régimen de algunos de estos gravámenes, cuya aplicación ha dado lugar a serias controversias interpretativas, con las consiguientes dificultades para el fisco y los contribuyentes; b) Actualizar y suprimir algunas alícuotas diferenciales que no están de acuerdo con el momento tributario o que ya no hay razón para mantenerlas; y c) Coordinar los distintos procedimientos administrativos y judiciales que se aplican en materia de sellos con los que corresponden a los demás tributos a cargo de la Dirección General Impositiva.

En el primer aspecto se ha buscado solucionar, entre otras situaciones, las referentes: 1º A la jurisdicción en el caso de operaciones realizadas en provincias con los bancos oficiales nacionales; 2º A la aplicación del tributo a los créditos en descubierto y a los depósitos; y, 3º El relativo a las operaciones de movimientos de fondos con el extranjero.

Teniendo en cuenta que por su naturaleza jurídica institucional la actividad de los bancos oficiales nacionales no puede alterar la jurisdicción y mucho menos la competencia de las provincias para gravar con un impuesto local de sellos los actos que se realicen dentro de su jurisdicción, se modifica el inciso b) del artículo 2º de la ley, para que ésta sólo sea de aplicación cuando los actos celebrados en provincias con estas instituciones nacionales deban surtir efectos, vale decir, negociados, ejecutados o cumplidos en jurisdicción federal.

Queda así estatuido legalmente en forma jurídica y respetuosa la autonomía provincial en esta materia impositiva, lo que les permitirá imponer válidamente un gravamen local de sellado a todos los demás actos que se realicen y deban surtir todos sus efectos dentro de su propia jurisdicción.

Esta solución, por otra parte, está en concordancia con la juiciosa resolución 56/52 del Ministerio de Hacienda y con un anhelo de los gobiernos provinciales, concretados en una ponencia aprobada por la Sexta Conferencia de Ministros de Hacienda.

Los problemas prácticos y doctrinarios que planteaban dos instituciones, el depósito irregular y el mutuo, cuya similitud en ciertos aspectos hacía difícil su diferenciación, han sido eliminados, haciendo clara y sencilla la aplicación del gravamen, mediante la aplicación de una tasa única cuyo producido es equivalente al de la actual, sobre todas las operaciones monetarias que devenguen interés.

Se exime del impuesto a la documentación de fianzas o garantías de operaciones ya gravadas en los capítulos substituidos, evitándose así la doble imposición.

Con igual propósito y fundamento que para la reforma de réditos, se desgrava totalmente de sellos a los depósitos bancarios en caja de ahorros, incluidos los que se realicen en las cuentas de participación en valores mobiliarios del Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias, aspecto éste al que ya me he referido en este informe al tratar las modificaciones a la ley de impuesto a los réditos.

Para evitar los inconvenientes de las dificultades interpretativas sobre movimientos de fondos con el exterior, se implanta un régimen que define con precisión la materia imponible, ciñéndola, en principio, a operaciones que se realizan con intervención del Banco Central y de las instituciones que éste autorice para operar en cambios, dejando a la reglamentación detallar con precisión las operaciones sujetas a impuestos.

De conformidad con el propósito de actualizar las alícuotas diferenciales a que ya he hecho referencia, como uno de los fundamentos de la modificación de esta ley, se eleva del 3 al 4 por mil el impuesto sobre operaciones de cambio colocándolos en igualdad de condiciones con actividades análogas.

Con igual orientación se elimina el trato preferencial para las operaciones de compraventa de mercaderías registradas en bolsas y mercados, por ser ajenas a este último tipo de entidades, y porque cuando se realizan fuera de bolsas y mercados, ya están sujetas estas operaciones con la tasa general del cuatro por mil.

En cuanto al sellado de recibos y giros internos, previa equiparación, se los actualiza. Con respecto a los giros internos, el proyecto elimina la imposición al procedimiento contable de las transferencias de fondos, resultando así únicamente gravadas las operaciones instrumentales mediante el respectivo documento.

La coordinación de los procedimientos administrativos y judiciales, tercer aspecto fundamental de la reforma, se traduce entre otras modificaciones con las siguientes: a) supresión del recurso de apelación ante el Ministerio de Hacienda de resoluciones dictadas por la Dirección General Impositiva; b) admisión de los recursos de reconsideración y repetición ante la Dirección General Impositiva y previstos por la ley número 11.683 de procedimientos, texto ordenado en 1952; c) recurso judicial de conformidad con la misma ley, sin perjuicio de los recursos administrativos del inciso anterior; d) extensión al impuesto de sellos de las normas de prórroga y prescripción, con todas sus modalidades sobre plazo, forma de contarlos, causa de la suspensión e interrupción, de la ya

citada ley 11.683, y e) exención del gravamen a los contratos y operaciones resultantes de convenios del gobierno nacional con gobiernos extranjeros, siempre que se admita la reciprocidad. La disposición contenida en el artículo 12 del proyecto del Poder Ejecutivo, legaliza la situación reglamentaria que estaba en vigencia por los decretos 11.554/54 y 13.115/54.

El detalle de las modificaciones, en cuanto hacen a la parte dispositiva del articulado, será informado durante el tratamiento en particular.

El capítulo IX del mensaje del Poder Ejecutivo se refiere al artículo 13 del proyecto y contiene las modificaciones a la ley de derechos de inspección a las sociedades anónimas, texto ordenado en 1952.

Las modificaciones, en general, son las siguientes: a) actualización de los derechos de inspección, que tienen más de veinte años de vigencia, pues son de enero de 1932; b) graduación de estos derechos en función del capital de las empresas, para adecuarlos con relación a la capacidad contributiva de las sociedades inspeccionadas; c) sanción para la mora en el pago, mediante la inclusión de una norma al respecto, de que carece la ley actual; d) supresión de las normas que fijan la forma y el destino de los ingresos por derechos y que ya están reglados por la ley de procedimientos en esta materia, 11.683.

El artículo 14 del proyecto es una simple disposición aclaratoria de la ley 14.345 y establece cómo debe jugar el quince por ciento a que se refiere el artículo 17 de la misma, y expresa que ese por ciento se aplicará sobre el precio de venta de las cubiertas, en igual forma que la tasa del treinta por ciento que fija el artículo 112 de la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1952.

Bien, señor presidente y señoras y señores diputados. Dejo así informado en general el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sobre modificaciones al régimen tributario nacional que, a través del análisis un tanto somero que acabo de realizar para no fatigar la atención de la Honorable Cámara, pone de manifiesto la cuidadosa armonía que se ha observado en su articulación, entre la justicia distributiva de las cargas impositivas, los intereses siempre crecientes del potencial económico de la Nación, las necesidades fiscales y las exigencias de una técnica moderna y científica de un acertado régimen fiscal.

Por estas razones, y sin perjuicio de ampliar este informe cuando se trate el proyecto en particular, en nombre de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, solicito su aprobación.

¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fassi. — Señor presidente: el despacho que consideramos contiene la prometida reforma de nuestro régimen impositivo; reforma anunciada por el señor ministro de Hacienda al debatirse el presupuesto de los años 1953 y 1954, y enunciada en el segundo Plan Quinquenal en términos que no difieren substancialmente de la posición que sostiene la Unión Cívica Radical.

Es por eso que esperábamos con ansiedad este proyecto del Poder Ejecutivo, que hemos estudiado con hondura dentro del precario lapso de que dispusimos para hacerlo. Pero debemos confesar nuestra desilusión: no es la culminación de una política, sino el fracaso y la defeción de un pensamiento que pretendió erigirse en doctrina y en doctrina revolucionaria.

¿Cuáles eran las ideas esenciales del señor ministro de Hacienda en el debate del presupuesto para 1953 y 1954? Que el régimen impositivo argentino desde larga data entrañaba una injusticia, y que se había producido una evolución, acelerada en los últimos tiempos, para distribuir más equitativamente la carga impositiva. El momento culminante de esta evolución habría sido el año 1950, en que los impuestos directos representaban el 49 %, en tanto que los indirectos significaban el 51 % de la recaudación fiscal.

En el debate a que hago referencia, el señor ministro hubo de confesar que en el curso del año 1951 se había producido un retroceso, es decir, que aumentó el monto de los impuestos indirectos al 55,1 % y disminuyó la carga de impuestos directos al 44,9 %. Manifestó entonces el señor ministro: «Pero las normas adoptadas en la materia por el gobierno nacional han de asegurar para el futuro la modificación de esas cifras con el aumento de las cargas directas y la disminución de las indirectas.»

Nosotros creíamos que la reforma impositiva importaría un paso audaz en la vía que en este discurso del año 1952 señaló el señor ministro de Hacienda. Pero, ¿qué es, en cifras, lo que propone mediante el despacho que consideramos? Lo ha dicho el señor ministro en el curso de las deliberaciones en el seno de la comisión: significa disminuir los impuestos directos en la suma de trescientos millones de pesos y aumentar los indirectos en ciento diez millones de pesos. Vale decir, que sentado como pensamiento compartido por todos los sectores de la Cámara, que un sistema justo de imposición debe ir trasladando la carga impositiva de los impuestos indirectos a los directos, el señor ministro de Hacienda confiesa paladinamente que en virtud de esta iniciativa se va a romper el equilibrio haciendo más pesada la carga tributaria de los impuestos indirectos en la suma de

ciento diez millones de pesos, y desgravando, por el contrario, los impuestos directos.

Cuando reflexionábamos en cuál sería la exteriorización del pensamiento del Poder Ejecutivo, teníamos la sospecha de que iba a producirse una rectificación de sus reiteradas declaraciones. De ahí que no nos sorprende el cambio de frente: lo temíamos.

Cuando se ponderan las ventajas y los inconvenientes de los distintos impuestos se tiene en cuenta cómo se comportan frente a la prosperidad o a la depresión económica. Es preciso aclarar que, desde este punto de vista, no todos los impuestos directos ni todos los indirectos se comportan de la misma manera.

Los impuestos directos que tienen un asiento fijo en el capital, por ejemplo, son los que mantienen mejor el ingreso fiscal a pesar de la depresión económica; mientras que los impuestos indirectos que no gravan los consumos imprescindibles son los primeros en declinar en tal circunstancia. Dentro del sistema fiscal argentino los impuestos directos que son materia de desgravación no tienen un asiento fijo en el capital sino en la renta, vale decir, que son impuestos que declinan en momentos de depresión económica. Por el contrario, los impuestos indirectos de nuestro régimen rentístico gravan al gran consumo popular, a las masas proletarias, que no pueden reducir su mínimo de vida sin desmedro de su bienestar, por lo que están llamados a triunfar exitosamente sobre la depresión, asegurando al Estado, aun en los peores momentos de la economía, los recursos necesarios para continuar con sus cuantiosos y gravosos presupuestos.

Frente al proyecto que estamos considerando, cabe preguntarse, por eso, si hay un real propósito de desgravación impositiva en cuanto a los impuestos directos, o si éste es un medio para que la verdadera situación económica de la Nación no surja del monto de la recaudación impositiva. Porque no vaya a creerse que la menor recaudación fiscal de los impuestos directos en 1955 será la consecuencia exclusiva de una política fiscal más benigna, puesto que ya antes de esta reforma hemos podido apreciar la declinación en la recaudación de impuestos directos que hoy son materia de desgravación.

Así, por ejemplo, si comparamos las recaudaciones de los años 1952 y 1953 observaremos que en el impuesto a los réditos se operó una disminución de 9,7 millones de pesos y que en el impuesto a los beneficios extraordinarios la disminución ha sido de 140,3 millones. El único impuesto directo que aumentó en 1953 es el impuesto a las ganancias eventuales; pero, como lo señala el Poder Ejecutivo en el mensaje que acompaña a la cuenta de inversión correspondiente a dicho año, ello se ha debido no al acrecimiento de los recursos derivados

de operaciones de 1953, sino a que en ese año se realizaron percepciones cuantiosas correspondientes a anteriores períodos de prosperidad, la que fué interrumpida como consecuencia de los errores de la política del gobierno que en este momento rige los destinos del país.

Si acudimos a una fuente más inmediata, a la recaudación fiscal durante el año 1954, observamos que este proceso de la recaudación fiscal por impuestos directos sigue la misma curva descendente, mientras que, al mismo tiempo, observamos que los impuestos indirectos, los impuestos al consumo, acrecen en el curso del año 1954. En gran medida este fenómeno es la consecuencia del proceso inflacionista, y también, de actos del Poder Ejecutivo que por sí y ante sí aumentó determinados impuestos, como veremos en el curso de esta exposición.

Durante los seis primeros meses del año 1953 la recaudación proveniente del impuesto a los réditos fué de 2.076.300.000 pesos.

En el mismo período del año 1954 disminuyó a 2.053.900.000 pesos. La recaudación en concepto de beneficios extraordinarios durante los seis primeros meses del año 1953 fué de 287.500.000 pesos, declinando en igual período del año 1954 en que sólo se percibieron 250.000.000 de pesos, vale decir, 37.500.000 pesos menos. En cambio, los impuestos internos se elevan durante ese período de 1.166.300.000 pesos a 1.328.600.000 pesos; los impuestos a las ventas acrecen de 1.332.400.000 pesos a 1.557.700.000 pesos. Y el impuesto de sellos pasa de 209.600.000 pesos a 217.400.000 pesos. Por lo tanto, cuando nos refiramos a los ingresos impositivos de los años 1955 y 1956 y a la incidencia de la reforma que estamos considerando, no le atribuyamos toda la disminución de gravámenes que va a aparecer en la recaudación fiscal, y ponderemos en su verdadero valor este estado de depresión de nuestra economía que mal se puede ocultar con elementos efectistas de una propaganda sin respuesta.

En esta materia debemos decir, manteniendo ideas que ha sostenido en este recinto la diputación radical, que nosotros no consideramos que el impuesto sea necesariamente un mal. No estamos cerradamente por una política de desgravación impositiva: el impuesto es bueno o malo según su empleo y según que cumpla, en realidad, una equitativa función de redistribución de la renta nacional restando lo superfluo de los privilegiados para asegurar por ese camino, por ejemplo, la salud y la educación popular.

Nosotros consideramos que en cierta medida la función de la redistribución de la renta responde al pensamiento de nuestros tiempos; pero lo que no puede ser es que disminuya el jornal del mecánico o del tejedor, para mantener una clase burocrática parasitaria que influya sobre el consumo y no sobre la producción de bienes de consumo y de capitalización, trayendo como

consecuencia el encarecimiento de la vida y el empobrecimiento colectivo.

Consideramos, además, perjudicial el impuesto cuando se emplea no sólo en burocracia inútil, sino cuando tiene por destino mantener instrumentos de opresión y de soborno.

Confirmamos que la imposición es mala cuando vemos que después de una política de acrecentamiento de los gastos públicos, en vez de exhibirse a la República tonificada en su economía, se la presenta declinante, como surge de todos nuestros índices estadísticos actuales, a través de las publicaciones oficiales.

También sabemos que el impuesto no sólo actúa sobre la economía por el monto de lo que el Estado absorbe de la renta nacional, sino que es un importante factor psicológico. En determinada coyuntura conviene descargar el peso impositivo para crear confianza, para tonificar a la actividad privada, para que ésta se anime a emprender nuevos cauces, a fin de multiplicar la riqueza y terminar con los signos de la depresión.

Por eso es que tampoco sostenemos como una doctrina firme el equilibrio del presupuesto. En algunos momentos debe tenerse el coraje del déficit; lo que no puede ser es que reiteradamente se disimule el déficit con arbitrios inocentes que a nadie engañan.

Y como ponderamos la necesidad de tonificar a la actividad privada, no estamos en contra de la desgravación propuesta. Las medidas de desgravación contenidas en el despacho merecen, en general, nuestro auspicio; pero no las consideramos tan intensas como para ejercer un tonificante efecto psicológico sobre las actividades privadas, y menos aún como un justificativo para aumentar los gravámenes que pesan sobre la gran masa de la población. No se puede ser generoso con los privilegiados a costa de los humildes; ésa es una política contra la cual se levanta nuestra voz de protesta en este recinto.

Asentimos en particular a la desgravación de los pequeños réditos, aun cuando a título personal creo que está insita en el sistema republicano la uniformidad de la carga impositiva, es decir, que el mayor número de los ciudadanos debe soportar una contribución directa, que es la forma más clara de comprender que todos estamos comprometidos por el acierto o por el error de los gobernantes y que no somos ajenos a las cargas que impone la vida en sociedad. Considero, por ejemplo, que una persona que gana en su trabajo personal 3.250 pesos, cualquiera que sea su carga de familia, puede pagar un rédito de 200 ó 300 pesos anuales, si se le descarga, por ejemplo, de los 700 pesos por año que paga como fumador o de los 2.000 pesos o más que a una persona de ese patrimonio el fisco le sisea subrepticamente en sus adquisiciones corrientes, al proveerse de la ropa para

los suyos y la propia, el calzado que usan, el biberón del hijo, la cuna del recién nacido, las sábanas, las entradas a los espectáculos públicos, porque detrás de todos esos gastos y de todas las cajas de los comediantes está la voracidad fiscal reclamando una parte siempre creciente de los ingresos del pueblo. Eso sin contar con los impuestos ilegales que no votó el Congreso, como el que denuncié alguna vez en esta Cámara, por el que se obliga a los importadores a pagar, además del derecho de aduana, una diferencia a favor del IAPI para obtener permisos de importación, diferencia que es otro verdadero impuesto aduanero que no tiene sanción del Congreso y que, en consecuencia, es inconstitucional. Lo mismo ocurre con la contribución «voluntaria» del primer mes de sueldo que tiene que hacer todo obrero cuando, precisamente, a consecuencia del costo de la vida, es indispensable aumentar sus ingresos para que pueda atender las elementales necesidades del hogar.

Si estamos conformes con la disminución del gravamen a las pequeñas rentas, no opinamos lo mismo sobre el aumento del impuesto a las rentas medias y con la estabilización del porcentaje a las grandes rentas. Carecemos, señor presidente, de los datos estadísticos, que sólo puede proporcionar el Poder Ejecutivo, sobre lo que significa el aumento del impuesto a los réditos que deriva de las rentas medias. No sabemos si por sí solo ese aumento va a cubrir la desgravación que sufren las pequeñas rentas, y no sabemos en qué medida está de acuerdo con el pensamiento central de este proyecto, al que me referiré luego, sobre la capitalización que se persigue para el robustecimiento de nuestra economía. Pero ya hemos manifestado en el seno de la comisión, y lo decimos también en la Cámara, que con lo que no estamos de acuerdo es que la escala progresiva se detenga en las rentas de 750 mil pesos por año. Desde entonces el gravamen se estratifica en el 33 por ciento del excedente. El que gana un millón por año paga sobre la diferencia entre 750 mil y un millón de pesos, el 33 por ciento; y el que gana cinco millones por año seguirá pagando dentro de este sistema el 33 por ciento. Es indudable que desde el punto de vista de las leyes económicas no es igual la utilidad del primer millón ganado que la del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto o del sexto.

Cuando un particular llega a ganar cifras astronómicas —cosa que parece ser una de las exteriorizaciones visibles de nuestra economía—, lo justo, lo equitativo, es que la escala del impuesto a los réditos siga progresando e incida más sobre el que gana cinco millones de pesos por año que sobre el que gana un millón anualmente.

A esta altura del sistema no hay progresividad. El señor ministro manifestó, frente a

nuestra argumentación, que está en el propósito de la reforma la capitalización del país.

Voces autorizadas han observado, coincidiendo con el pensamiento del ministro, que el impuesto a la renta, tan equitativo desde el punto de vista social, sería un obstáculo al proceso de capitalización, necesario sobre todo en economías como la nuestra. Yo creo, señor presidente, que con el 33 por ciento sobre los réditos de más de un millón de pesos estamos muy lejos de obstar a ese proceso.

Sr. Degreef.—El impuesto en conjunto es del 40 por ciento. No hay que olvidar, señor diputado, el 7 por ciento básico.

Sr. Fassi.—El impuesto es del 33 por ciento y nada más.

Sr. Degreef.—Hay que agregar el 7 por ciento.

Sr. Fassi.—Yo me estoy refiriendo a la escala progresiva.

Sr. Degreef.—Pero en total el impuesto es del 40 por ciento.

Sr. Fassi.—Aun con el concepto del señor diputado, el impuesto es menor, porque hasta 750 mil pesos se va produciendo una progresión que no llega al 33 por ciento; vale decir, que el que gana un millón de pesos por año paga el 28,55 por ciento de impuesto, y el que tiene una ganancia de 5 millones, aunque es mayor la cifra sobre la cual paga el 33 por ciento, soporta un gravamen del 32,11 por ciento.

Sr. Degreef.—No olvide el señor diputado el impuesto básico de \$ 200.000, aplicable a las ganancias excesivas, que aumenta el porcentaje del impuesto.

Sr. Fassi.—Ese impuesto básico sobre una ganancia de \$ 5.000.000 no tiene importancia.

Para penetrar en las ideas que inspiran la reforma impositiva, tenemos que poner en evidencia cuál es el concepto del Poder Ejecutivo sobre la capitalización de la renta, que no sólo surge de la benignidad con que son tratadas las ganancias de más de \$ 1.000.000, sino de todas las demás modificaciones propuestas en el despacho que consideramos.

Todo parece conjurarse para estimular a los grandes capitales. La política de capitalización puede seguir dos vías: una, que se nutre en nuestro propio suelo, que se forma —para valerme de un símil— como nuestros grandes ríos, que nacen en escondidas fuentes, en pequeños hilos de agua que se van acumulando hasta formar inmensos caudales. Es la capitalización constituida como consecuencia de las pequeñas inversiones del ahorro de toda la colectividad, de las que se van acumulando peso por peso en el afán de los hombres modestos de hacerse una posición económica. Otra vía es como el flujo del mar, que viene de afuera: es

mucho más voluminosa y contiene mucho mayor caudal, pero aparece en contradicción con

lo que durante mucho tiempo se llamó la doctrina nacional peronista.

En el proyecto que estamos considerando, todo demuestra que lo que se quiere es alentar a los grandes capitales y apartar a los pequeños capitales de la actividad productiva y de las inversiones útiles. Este pensamiento se descubre en todas las disposiciones del despacho, particularmente en algunas que parecen simpáticas e inocentes, que, miradas en sí mismas, no merecen sino el auspicio de la Honorable Cámara, pero que están revelando un pensamiento contra el cual debemos exteriorizar nuestra protesta.

¿Qué es lo que se le ofrece al ahorro nacional? La desgravación de los fondos que ingresan a las cajas de ahorro y la desgravación de los seguros en el monto diferencial entre las primas y la indemnización. Ese es el cauce que se busca para el ahorro popular, agotados todos los demás, porque ya están muy distantes los tiempos en que sobre la base del ahorro se podía construir la vivienda, o en que el ahorro podía derivarse hacia las cédulas hipotecarias, por ejemplo, que era un medio de fomentar la vivienda sin empapelar el país. Ya están muy distantes los tiempos en que con un pequeño capital se podía emprender un pequeño negocio. Hoy se necesitan sumas de dinero que superan la capacidad del ahorro popular para seguir cualquiera de esas vías, y entonces se incita a la masa ahorrista a que lleve los fondos a las cajas de ahorro o los desvíe al seguro de vida.

¿Qué hay detrás de las cajas de ahorro y del seguro de vida? Está el Estado, que convierte esos fondos en títulos de crédito público, y los destina a fines que no son de capitalización productiva, es decir, que los aparta de la multiplicación de los bienes de consumo y de los bienes de producción para atraerlos hacia el crédito público, y gastarlos con ese concepto que acompaña la política peronista, en cuya virtud, a medida que transcurre el tiempo aumenta el presupuesto, declina la economía y los servicios públicos se convierten en una catástrofe nacional.

Frente al proyecto que estamos considerando, observamos el tratamiento a las sociedades anónimas, que yo no voy a presentar en toda su integridad porque de eso se ocupará nuestro compañero de representación el señor diputado Alende, pero respecto de lo cual quiero hacer una breve incursión vinculada a la política impositiva que se mantiene en el despacho.

La economía política enseña, aun apartándose de los augurios catastróficos de Marx, que hay una ley de concentración de los capitales y de las empresas; que no es posible que siga el progreso de la producción en sus grandes líneas, sino mediante la concentración de los capitales en grandes empresas.

¿Quiere decir que estamos condenados a una sociedad en que se acentuarán los desniveles en-

tre los poseedores de grandes fortunas y los desheredados que nada poseen? Indudablemente, no, si es que la sociedad anónima fuera el cauce del ahorro popular para que los pequeños inversores convirtieran ese ahorro en acciones que tienen un valor nominal pequeño. Así, en alguna economía más evolucionada que la nuestra, se ha producido el fenómeno de que al lado de grandes empresas que acumulan inmensos capitales, que producen rentas a veces superiores a las propias recaudaciones del fisco, vemos una democratización del capital, por la circunstancia de que la mayor parte de la colectividad posee acciones de esas grandes sociedades anónimas.

Pero para nuestro régimen impositivo, la sociedad anónima se supone siempre de propiedad de plutócratas, y entonces, el impuesto a los réditos grava severamente sus rentas. Los réditos de las sociedades anónimas soportan un gravamen del 30 por ciento. Cuando se trata del poseedor de un gran manojito de acciones, que le producen una renta de un millón de pesos o más, el 30 por ciento es una modesta contribución, pues resulta menor que la escala del 33 por ciento. Pero cuando se trata de pequeños ahorristas que han invertido sus fondos en la adquisición de acciones de sociedades anónimas, constituye una verdadera exacción que se los priva del 30 por ciento de las ganancias.

Se podrá argüir que se mantiene el sistema para impedir la evasión del impuesto; pero si tal fuera el propósito, podría lograrse el mismo resultado sin perjudicar al pequeño ahorrista poseedor de algunas acciones, mediante la posibilidad de computar ese 30 por ciento en sus declaraciones juradas y de obtener la devolución de la diferencia cuando le corresponda pagar un gravamen menor al 30 por ciento.

No es ésta la defensa de las sociedades anónimas como concentración de grandes capitales. Esto es asegurar la única vía que le queda al pequeño ahorro, apartado de la casa propia, apartado de la empresa individual iniciada con pequeño capital, apartado de la cédula hipotecaria y que no puede tener fe en el título de crédito público, el cual sólo inspira confianza a las instituciones oficiales.

Quiero referirme rápidamente a los aumentos contenidos en el despacho, que, según el señor ministro, ascienden a 110 millones de pesos.

¿Cuál es la principal fuente de ese aumento? Cuando la Cámara tenía otra composición, escuché a un diputado del Partido Socialista hablar de impuestos simpáticos y calificar como tales a los impuestos internos al vicio. Cuando se estudia en economía el mínimo de vida de un hombre de trabajo, ¿acaso sólo se tiene en cuenta el alimento, el vestido y la habitación, imprescindibles para vivir en un grado más elevado que las bestias? No, señor presidente; en cualquiera de los libros de economía se toma

en cuenta las modalidades de cada pueblo, y no se puede entender, por ejemplo, que un obrero inglés no tenga que agregar a lo imprescindible el tabaco y el té. Y yo me animaría a decir que el obrero argentino tal vez prescindiría del alimento antes que del cigarrillo. Sin embargo, nosotros observamos que el Estado, en este momento de depresión, se precipita de nuevo sobre ese consumo popular para hacer más gravosa la carga que soporta el pueblo. Sería ideal que no se fumara...

Sr. Fernández (H. S.). — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con autorización de la Presidencia?

Sr. Fassi. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Fernández (H. S.). — Las palabras del señor diputado involucran una gran injusticia respecto de la vida argentina, puesto que no puede decirse que el obrero no dispone de tabaco para fumar, que no viste, que no tiene lo más elemental para su vida cotidiana.

Que el señor diputado considere que el gobierno, al no desgravar algunos de estos productos que hacen a las necesidades diarias del obrero, grava en algo el presupuesto del obrero argentino, no significa que en estos momentos no disfrute de esas pequeñas cosas que el señor diputado entiende le están totalmente prohibidas. Esa afirmación encierra una gran injusticia, y el pueblo argentino sabe perfectamente que nuestros obreros viven mejor, comen mejor y visten mejor. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fassi. — No basta oponer una afirmación para rebatir otra afirmación. Para contestar al señor diputado yo tendría que dar como contenido a mi afirmación lo que surge de las estadísticas oficiales y que desmienten el pensamiento del señor diputado.

El obrero argentino vive mal. Lo más grave es que a medida que transcurre el tiempo se lo castiga en su eficiencia y en su capacidad, porque el obrero de oficio es el que vive peor, y ya no tiene esperanzas de vestir bien, vistiendo lo que tenía, porque no tiene con qué renovar el vestuario.

Sr. Fernández (H. S.). — Pero come y viste perfectamente bien.

Sr. Fassi. — Come y viste como puede.

Sr. Fernández (H. S.). — Paga el impuesto con toda holgura.

Sr. Fassi. — Paga el impuesto ignorándolo.

En el debate de 1952 demostré que el obrero argentino nunca había comido peor, y hasta ahora no me han contestado con estadísticas. Pero, aun suponiendo que el obrero pueda pagar cómodamente los impuestos con que se lo grava,

pregunto: ¿dónde está la política que se ajuste al enunciado del capítulo XXII, punto E 14 del segundo Plan Quinquenal, que dice que «los artículos de consumo personal imprescindibles o básicos serán objeto de exenciones y reducciones impositivas, así como los artículos sanitarios o higiénicos de uso habitual del pueblo»?

Sr. Fernández (H. S.). — El proyecto que consideramos contempla esos propósitos del segundo Plan Quinquenal.

Sr. Fassi. — Observen los señores diputados: el 11 de septiembre de 1952, el Poder Ejecutivo, por sí y ante sí, dictó el decreto 6.140 por el que modificó el impuesto a los cigarrillos. ¿Cuál es la excusa que dió el gobierno con respecto a este aumento? Que era necesario reajustar los costos de producción. Para ello permitió que el cigarrillo de 60 centavos fuera aumentado a 70, repartiéndose la diferencia en la siguiente forma: 5,8 centavos para el Estado y 4,2 centavos para el industrial; y que el cigarrillo de 1,10 se elevara a 1,20, distribuyéndose la diferencia de tal modo que el Estado percibiera 6,2 centavos y el industrial 3,8 centavos. Vale decir que, so pretexto de contemplar la situación del industrial, se dictó un decreto que tiene por objeto aumentar la recaudación fiscal en forma tan exitosa que el impuesto interno al tabaco, que en 1952 había producido \$ 895,1 millones, en 1953 importó 1065,3 millones de pesos.

Pero el Estado no se conforma —¿qué se va a conformar el Estado peronista, que no se conforma nunca cuando se trata de gravar los consumos!— y este aumento del año 1952 le parece insuficiente, por lo que en el despacho que estamos considerando vuelve a introducir un nuevo aumento, de tal manera que se convierte en Estado puritano que castiga al que fuma, olvidándose que lo hace la mayor parte de los proletarios argentinos. Reducir a un rentista 200 pesos de renta por año y aplicarle a un hombre, porque fuma, 700 u 800 pesos de impuestos por año: ¡ésa es la justicia peronista!; pero vamos a suponer que se trata de un impuesto al vicio.

¿Cómo se justifica con el enunciado del Plan Quinquenal la circunstancia de que el Poder Ejecutivo mantenga el impuesto a las ventas con su elevada cuota del 8 por ciento? Nosotros proyectamos en la comisión —y nuestra moción fué rechazada por el voto unánime del sector peronista— que se suprimiera o redujera el impuesto a las ventas con respecto al vestido, al calzado y a los utensilios del hogar, porque cuando comparamos los artículos exentos del gravamen en la ley vigente y en este reajuste que se proyecta, observamos que el único nuevo rubro que se agrega a los artículos exentos lo constituyen los bloques premoldeados de hormigón y el producido de la explotación minera. Yo pregunto, señor presidente, por qué no está exenta la alpargata del hombre de campo...

Sr. Fassi. — La usan en todas partes; lo que ocurre es que los señores diputados se han aburguesado y han perdido contacto con el país, pero sería bueno que recorrieran la República.

En alguna oportunidad dije en esta Honorable Cámara que en nuestro país el calzado de cuero se había convertido en un lujo, a tal punto que el calzado de cuero que usan las mujeres representa el 52 % del que usaban en 1943. Ahora se usan la alpargata y el «Boyero», porque el pueblo argentino disminuye día a día su standard de vida.

Se enuncia como un objetivo del Plan Quinquenal la reducción del impuesto a los consumos, pero se mantienen los que gravan: el vestido, el traje, la camisa, todo lo que hace al atuendo personal, todo lo que hace el adorno del hogar. ¡Ocho por ciento sobre los artículos comprendidos en las leyes de agio y especulación! ¡El Estado castiga al industrial que gana más del 4 ó 5 % y establece como participación suya el 8 por ciento!

Yo me animaría a decir que el mejor respiro para la economía popular sería la supresión de este 8 % del impuesto a las ventas. Pero si no es posible en un solo acto legislativo suprimir el impuesto a las ventas, por lo menos, señor presidente, que se demuestre una consideración con las masas populares rebajando este elevado gravamen del 8 % y llevándolo a límites más razonables. Más aún cuando me animo a afirmar, señor presidente, que no sería de repercusión inmediata sobre los recursos fiscales, en cuanto hay el arrastre de una larga deuda de impuestos que en este momento están ingresando aceleradamente en las arcas del Estado. Desgravación tanto más equitativa cuando por la vía de este impuesto a las ventas, el Estado se convierte en un socio de la inflación, porque todos sabemos que como consecuencia de los últimos justos e insuficientes aumentos de salarios, se va produciendo día a día, un aumento en el valor de los bienes de consumo, y el mayor valor de esos bienes, de todo cuanto hace al cumplimiento de las esenciales necesidades del pueblo, debe sobrellevar todavía un gravamen del 8 %, y el Estado percibe más aún sin mover ese porcentaje.

Además, el despacho comprende el aumento de otro de los impuestos que gravan la circulación de la riqueza, la producción y la actividad económica: la ley de sellos.

Alguna vez el equipo denominado económico pretendió establecer la uniformidad de los precios de los artículos comprendidos en las leyes de agio, en toda la extensión de la República; pero este propósito no quedó más que en el papel, no se hizo nada para convertirlo en realidad, para que los bienes de consumo valgan igual en La Quiaca que en Buenos Aires. ¿Por qué? Por la política del gobierno que si no pue-

de establecer barreras interprovinciales para la circulación de la riqueza, establece verdaderas barreras para la circulación del dinero, lo que influye indudablemente sobre los precios.

Cualquiera fuere su monto y su incidencia, es un impuesto injusto el que grava los cheques de plaza a plaza. Yo me animaría a decir que es un índice de civilización y de progreso la difusión del cheque, y no es posible que por el hecho de que un cheque circule de plaza a plaza y quien deba pagarlo viva en La Quiaca o en La Rioja, tenga que soportar el gravamen que el Estado le aplica al depositado al cobro en Buenos Aires. No puede ser tampoco que en un momento en que es necesario abaratar el crédito —porque difícilmente las empresas pueden soportar esta inflación constante de la moneda y de los costos con su propio capital— aparezcan o se mantengan gravámenes a los créditos bancarios. No puede ser que sin el conocimiento del Congreso, mediante facultades que se multiplican en esta ley, esa situación se agrave, directa o indirectamente, ya sea mediante el aumento excesivo de las tarifas postales para las cartas certificadas, únicas en las cuales pueden venir los valores del interior, o mediante la liberalidad con que al sistema bancario se le permite cobrar grandes comisiones cuando se trata de la compra de cheques emitidos en el interior.

Todo esto contribuye, en la misma medida que la mala política en materia de fletes ferroviarios, a ahondar el problema que en la República significa la distancia. Una buena política impositiva no puede seguir estas vías; una buena política impositiva debe analizar estos problemas en todas sus proyecciones, debe hacer un planteo de altura y debe llevar a la economía argentina alarmada, la confianza que necesita para recobrar impulsos y para asegurar los grandes destinos nacionales. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Alende. — Señor presidente: lamento no tener delante mío la palabra de algunos de los señores diputados de la mayoría, para poder desarrollar sobre ella el hilo de mi disertación.

Para centrar mi pensamiento, y obligado por esa circunstancia, he de tomarme de la ligera y jugosa interrupción que formulara a mi compañero de sector el señor diputado Fernández, quien al expresar lo que él supone una realidad social, pretendía contraponerla al tema que tratamos en este momento, que importa discriminar sobre la política impositiva como instrumento de gobierno para realizar una determinada política económica y social. No corresponde, pues, hacer el examen —para el que tendríamos amplio argumento— de lo que el señor diputado de la

mayoría supone una realidad social. Ya llegará el momento.

Lo que importa e interesa en la circunstancia es establecer en qué medida el oficialismo utiliza la política fiscal crediticia con un sentido social a tono con las que han sido sus permanentes enunciaciones teóricas, y también sus permanentes contradicciones prácticas.

Dice, por ejemplo, el Poder Ejecutivo en su mensaje, que «con este proyecto de ley se ha de utilizar la función del impuesto como instrumento de gobierno al servicio de la justicia y de la economía social del país». No es cierto.

Dice que «este vasto plan de reformas impositivas tendrá un trascendente contenido social». No es cierto. Que «este plan procurará una equitativa redistribución de la carga fiscal, en relación con la capacidad contributiva de la población». Tampoco es cierto. Que «procura alcanzar una incidencia equilibrada de los tributos». Tampoco lo es. Que «desgravará en mayor proporción los réditos del trabajo personal y los consumos indispensables». Tampoco esto constituye una verdad.

Posiblemente, lo exacto es establecer que este proyecto vinculado a los tributos constituirá «una etapa más en la adecuación a la orientación justicialista», que efectivamente, a partir del año 1946, en forma tímida al principio —para no aparecer en contradicción evidente con los postulados de contenido popular lanzados por la política oficialista—, pero en forma ya grosera hoy, acentúa los tintes de una protección a los intereses del privilegio nacional y extranjero, en detrimento de los intereses económicos y sociales de los sectores más oprimidos de la comunidad nacional.

Por eso, bien ha hecho el señor diputado por la Capital doctor Fassi —sigo el hilo a que me ha llevado la interrupción del señor diputado Fernández—, en establecer con precisión el módulo de este proyecto del Poder Ejecutivo.

Entiendo que sería útil al país no esconderse detrás de las palabras para confesar con propiedad y realidad la esencia de una política económica que obra mancomunadamente en cuanto se refiere a los tributos y al crédito, y también a la aplicación de esas rentas, orientada en un rumbo que el Poder Ejecutivo no se atreve a confesar, pero que debería hacerlo porque eso se encuentra vinculado a sus propósitos de estimular la producción por cualquier medio y de cualquier manera.

Ya el señor diputado Fassi, mi compañero de sector, ha hecho escuchar su opinión general en cuanto al concepto con que el radicalismo se maneja en esta materia del tributo fiscal y ha señalado la regresividad manifiesta de este proyecto del Poder Ejecutivo que acentúa la imposición indirecta, mientras desgrava la imposición directa, o sea que se coloca en materia

social en cuanto a la tributación, de acuerdo con el pensamiento de los sectores más reaccionarios de la sociedad.

Nosotros propugnamos una reforma financiera que haga incidir la carga sobre las grandes rentas y sobre el mayor valor producido por el trabajo colectivo.

En la Constitución de 1853 se adoptó el concepto de igualdad en materia de contribuciones, lo que no fué óbice para que bajo el amparo de esa Constitución, en la que cabía todo progreso económico y social, se instituyera el impuesto a los réditos en 1932. Ese concepto se modificó en la Constitución de 1949 por el de la equidad y la proporcionalidad. Nosotros, que en esta política estamos como en todos los otros aspectos de la vida económica y social del país, en una concepción de avanzada social, señalamos claramente nuestro pensamiento proclive al concepto del impuesto progresivo y al de una política fiscal adoptada con un neto sentido social.

Vamos a analizar, aunque fuera ligeramente, lo más importante de este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

En cuanto al impuesto a los réditos, se proyecta elevar el mínimo no imponible a \$ 7.200 anuales, uniformándolo así para todas las categorías. Actualmente es de \$ 3.600 para las primera y segunda categorías, que comprenden la renta del suelo y de los capitales mobiliarios, y de \$ 6.000, como es sabido, para las tercera y cuarta categorías, vinculadas, respectivamente, al comercio y la industria y al trabajo personal.

El concepto del mínimo no imponible debe vincularse con las necesidades básicas para la subsistencia, y en tal sentido es lógico uniformarlo para todas las categorías, como se proyecta. En cambio, es notoria, como lo ha señalado el señor diputado Fassi, la insuficiencia de esta cifra en lo que se refiere a la satisfacción de las necesidades elementales debido al mayor costo de la vida, que ha experimentado un aumento —sobre el cual no he de volver, pues lo hemos recordado en distintos debates— que, con relación al año 1943, supera ampliamente el 600 por ciento, tal como lo registra la Síntesis Estadística Mensual del Ministerio de Asuntos Técnicos. En realidad, las constancias del diario vivir hacen que esas cifras oficiales se vean abundantemente superadas en los hechos.

Además, según el proyecto, la deducción adicional por cargas de familia se elevaría de \$ 1.500 a \$ 2.400 anuales, e igual cambio experimentaría la deducción por cónyuge y la que corresponde por otras cargas, que pasarían de \$ 1.200 a \$ 1.800 anuales.

Es evidente que esta modificación proyectada por el Poder Ejecutivo —que seguramente ratificará la mayoría de la Cámara, como ya fué ratificada en la comisión— está totalmente alejada de la realidad. Estimar que puede mante-

nerse un cónyuge o un hijo sin recursos propios con la suma de \$ 2.400 y \$ 1.800 anuales, respectivamente, es estar por completo al margen de la realidad económica y social argentina.

El proyecto no contiene ninguna innovación sobre la disposición actual que sólo autoriza a practicar esas deducciones cuando las personas a cargo del contribuyente tuvieran ingresos propios inferiores a \$ 2.400 o \$ 1.800 anuales, cifra que, naturalmente, no permite asegurar una subsistencia mínima, e implica una discriminación totalmente injustificada.

Para los contribuyentes que obtengan réditos de trabajo personal, la deducción adicional vigente se elevaría de \$ 12.600 a \$ 15.000 anuales, y si se toma en cuenta que aquella cifra fué fijada en 1949, puede concluirse que en este monto hay también un total desajuste con la evolución económica experimentada por el país desde entonces a hoy.

En lo que se refiere a las tasas adicionales que se aplicarán a partir de los 10.000 pesos imposables anuales, en lugar de la suma actual de \$ 5.000, también el proyecto tiene la anomalía de que si establecemos que las deducciones permitidas son insuficientes, como ya hemos dicho, para cubrir los gastos de subsistencia, todo eso hace que el impuesto recaiga no ya sólo sobre el ahorro, impidiendo toda posibilidad de ahorro voluntario, sino que pone en riesgo la propia posibilidad de subsistencia del contribuyente.

Nosotros entendemos que corresponde liberar total y definitivamente del impuesto a todos aquellos ingresos necesarios para asegurar un nivel de vida adecuado y digno, y que se deben aplicar las tasas compensatorias que aseguren límites mínimos de recaudación recién a partir de ese límite necesario para el nivel de vida.

De acuerdo con la doctrina del partido, tal como lo acaba de exponer el señor diputado Fassi, consideramos más razonable y justo elevar la tasa actual para los réditos superiores al millón de pesos anuales, a fin de equilibrar y compensar la pérdida de la recaudación derivada de las mayores exenciones a los réditos iniciales de la escala que corresponden a contribuyentes de menor poder económico.

Además el proyecto amplía la exención del impuesto a los intereses provenientes de cajas de ahorro y beneficios de capitalización, y se intenta ampliar el sistema de amortizaciones sobre bienes de activo fijo.

Debemos destacar en líneas generales lo inoficioso de las reformas proyectadas, mientras no se contemple en toda su integridad en la legislación impositiva la influencia de la ya irrefrenable inflación —al respecto no se cumplen las predicciones gubernativas anunciadas al tratarse el segundo Plan Quinquenal— y se adopte un régimen que contemple el aumento

de los costos de reposición de los bienes de producción.

Además, se mantiene la política fiscal en materia de sociedades anónimas, la cual sólo podrá rectificarse mediante la atendible proposición formulada por el señor diputado Fassi, tendiente a beneficiar a los pequeños ahorristas tenedores de acciones de sociedades anónimas, mediante la individualización de las acciones y el pago del gravamen sobre los dividendos según la escala que corresponda al tenedor o con la aplicación del impuesto sobre la propia sociedad, pero no en una escala que favorezca la concentración capitalista.

He de volver sobre el particular, porque considero importante y definitorio de la política fiscalista del gobierno, el tratamiento dispensado a las sociedades anónimas, so pretexto de ventajas técnicas que concluyen en graves repercusiones políticas para la salud económica y social de la República.

En cuanto al impuesto a los beneficios extraordinarios que este proyecto también modifica, se propone la autorización de amortizaciones extraordinarias permitidas para el impuesto a los réditos. La equiparación es explicable, según nuestro concepto, pero no resuelve el terrible problema que incide de manera notoria sobre las posibilidades de producción, creado por los mayores costos de producción vinculados a los mayores costos de reposición de materiales indispensables, que resultan tanto fruto del proceso inflatorio apoyado por la política del gobierno, como del manejo discrecional de las divisas por parte del Banco Central de la República.

En definitiva, el esfuerzo creador del agro argentino produce beneficios que, merced a la política de cambios del gobierno, en lugar de llegar al auténtico productor, van a parar a los bolsillos de los favoritos del gobierno premiados con una política discriminatoria en materia de permisos de cambio, que pone a su alcance la posibilidad de enriquecerse discrecionalmente.

Es evidente que resulta necesario procurar una salida a la desigualdad fiscal existente entre las empresas nuevas y las antiguas que trabajan con equipos de valor equivalente, pero de valor contable diferente según la época de adquisición. Los importes que por concepto de amortización pueden deducir las empresas más recientes, colocan a éstas en injustificada situación de privilegio.

Ayer, durante la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en presencia del señor ministro de Hacienda, el señor diputado Fassi recordó, entre otras cosas, las disposiciones vinculadas a esta materia adoptadas ya en otros países, como Italia y Francia, con índice inflatorio muy inferior al de nuestro

país, y que consisten, en definitiva, en una política que da estado fiscal a una revaluación de activos que compense la pérdida del valor adquisitivo de la moneda en función de los años de compra de los respectivos equipos de producción. Ese es en principio —ya lo señaló el señor diputado Fassi— el único procedimiento serio para asegurar la normal reposición de las plantas industriales y para evitar la indebida carga fiscal sobre el importe que, en realidad, no constituye ganancia.

Aparentemente, el proyecto autoriza amortizaciones discriminatorias según los años de compra, pero ello es insuficiente para resolver el problema, porque en la liquidación del impuesto a los beneficios extraordinarios no sólo juega un papel preponderante el total de las ganancias, que se reduce con el aumento de las amortizaciones motorizadas, sino también el capital afectado a la explotación, sobre el cual no inciden las amortizaciones extraordinarias que pueden aplicarse.

Además, por el proyecto se intenta elevar el mínimo no imponible en este impuesto de \$ 20.000 a \$ 30.000. Observando que existe una deducción igual al 12 % de las ganancias y que se trata de un impuesto sobre beneficios excesivos, estimamos que, aceptado que ese 12 % constituye un rendimiento normal, todo excedente ha de estar sujeto al gravamen. Por eso, parece inadmisibles tanto la deducción fija que se proyecta elevar, como algunas otras autorizadas por la ley vigente, por ejemplo la de un sueldo para los socios o la participación de los directores en las ganancias.

En lo referente al impuesto a las ganancias eventuales, el costo de los inmuebles y de los automotores se incrementará con el 5 % por cada año transcurrido desde la compra hasta 1945, y con el 10 % desde 1946 hasta 1953.

Este proyecto implica sentar la afirmación de que la pérdida del valor adquisitivo de la moneda es de un 80 % en el período 1946-1953 y así la información oficial expresa que tal desgravación está destinada a compensar el alza experimentada en el valor de los bienes, permitiendo una apreciable actualización de los costos computables. Lo cierto es que la propia información oficial ha admitido que en el mismo período el costo de vida ascendió a más de 600 %, como lo he expresado recientemente, en relación al año 1943, aunque, como también lo he dicho, el aumento real es en verdad superior.

En todo caso, es indiscutible que la compensación proyectada no alcanza ni lejanamente a cumplir su finalidad. Aquí, como en el caso del valor fiscal de equipos industriales, no parece haber otra solución que la de aceptar una revaluación, al solo efecto impositivo, de manera que el contribuyente sólo pague impuesto

sobre aquella parte de sus ingresos que implique una ganancia, pero no sobre aquella otra parte que sólo implique una recuperación de su capital invertido.

En cuanto a las modificaciones vinculadas al impuesto inmobiliario, sobre las que ya se ha hecho referencia, diré que en el seno de la comisión hicimos oír nuestra opinión en lo que respecta a la necesidad del fomento positivo de la construcción propia en esta materia vinculada a la política fiscal tributaria.

Pero donde yo quiero hacer mayor hincapié es en el trato que el gobierno da a las sociedades anónimas mediante su régimen innominado, porque, según mi manera de ver, en este tópico se resume la intención del gobierno en materia impositiva, aparte de que es el que insinúa una pérdida mayor para el monto tributario del Estado que el gobierno desperdicia y es el que asume también una mayor gravedad y consecuencias políticas quizá irreparables para el futuro económico de la Nación.

En el seno de la comisión le señalamos ayer al señor ministro de Hacienda nuestra impugnación fundamental en esta materia, destacando que este sistema adoptado por el oficialismo en 1950 y ratificado mediante este proyecto de ley, significa favorecer la concentración capitalista, el ocultamiento del dinero negro y de los dineros malhabidos y la acción indiscriminada en nuestro país del capital extranjero.

Quisiera tener la elocuencia necesaria, la capacidad de persuasión indispensable, el poder energético suficiente en mi palabra, para poder convencer a los señores diputados de la mayoría de la gravedad de las cosas que están votando, de lo que implica una política de este tipo en materia económica. Frente a aquellos que ayer rotulaban de «vendepatrias» y «cipayes» a los políticos conservadores amigos del capital británico, yo señalo que hoy la política económica del gobierno —a cuyo respecto los ministros en las conferencias económicas internacionales hablan de una nueva etapa en materia de régimen de capitales extranjeros— constituye una etapa de supeditación a los intereses extranjeros del capitalismo norteamericano, frente a los cuales la política del gobierno nos coloca en vasallaje.

Frente a esos intereses imperialistas, sobre cuya voracidad tiene acumuladas tan amargas experiencias la América latina, yo señalo que con el voto de este proyecto de ley los hombres del mañana, los muchachos universitarios que están presos en las cárceles argentinas y que habrán de escribir mañana, algunos de ellos, la historia de este ciclo económico de la Argentina, tendrán todo el derecho de extender su índice acusador y de señalar con los mas acusadores dictérios a los responsables de una política económica que supone la protección a los más perniciosos intereses del capitalismo inter-

nacional y de los grandes sectores del privilegio argentino.

Por eso, señor presidente, quiero señalar algunos conceptos aclaratorios sobre lo que supone e impone esta política sobre las sociedades anónimas.

La clasificación jurídica de las entidades comerciales formadas con aportes de capitales colectivos se diferencian con dos nombres distintos: unas son sociedades de capital y otras son sociedades de personas. En la sociedades de capital se toma en cuenta tan sólo el monto del aporte económico, y en las sociedades de personas, desde luego, se toma en cuenta fundamentalmente a los individuos que las integran.

Para confirmos a la realidad de nuestras leyes, ya que en la teoría se discute, por ejemplo, la ubicación de las sociedades de responsabilidad limitada, diré que se consideran sociedades de capital las sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones en la parte que no corresponde a los socios solidarios, las asociaciones civiles y todas aquellas sociedades que requieren la acción gubernamental mediante la necesaria obtención de la personería jurídica; y que, en cambio, se consideran sociedades de personas las sociedades colectivas, las sociedades de responsabilidad limitada y, en general, todas aquellas sociedades que pueden funcionar sin el reconocimiento o la autorización gubernativa.

¿Qué importancia tiene esta discriminación para la materia impositiva que tratamos? Desde que se estableció el sistema de impuesto a los réditos en 1932 hasta la ley votada en 1950, que lleva el número 13.925, recibieron igual trato, en lo que a impuestos se refiere, tanto las sociedades de capital como las sociedades de personas. El responsable de la contribución era el socio y no la sociedad. La sociedad debía, desde luego, declarar su evolución económica, pero no era la que pagaba el impuesto. El mismo recaía, hasta 1950, tanto en las sociedades de capital como en las sociedades de personas, exclusivamente sobre el socio.

Se trató, así, aquella sorpresiva ley, y se estableció una modificación revolucionaria, basada tan sólo —no podía haber otro argumento razonable— en la necesidad de facilitar el cobro del impuesto.

¿Qué características asignaba la política tributaria de la nueva ley?

Ya se establecía una diferencia de concepto fundamental entre las sociedades de capital, por un lado, y las sociedades de personas, por el otro. En las sociedades de capital, el contribuyente es, desde 1950, la empresa, que tributa un impuesto fijo y uniforme; la empresa es la que asume todas las obligaciones y las responsabilidades del tributo. Los accionistas actúan frente a ella como socios, al margen por completo de la situación económica y jurídica que

personalmente tengan. En cambio, para las sociedades de personas se mantuvo el régimen en vigor desde 1932: el socio paga lo que corresponde a la Dirección General Impositiva, teniendo en cuenta el total de sus rentas, sumando las de fuera de la sociedad y las de dentro de ella.

Señalo otra gravísima y perturbadora irregularidad en esta materia impositiva. Dada la premura del tiempo, significaré solamente que a partir de 1945 se había hecho obligatoria la denuncia por los contribuyentes de todo bien y deuda que tuvieran en el país o en el extranjero. En el debate de 1950 se estableció que eso no se había cumplido en su integridad. Y en este momento en que los valores utilitarios se colocan por encima de los valores éticos, señalo la imposibilidad oficialista para establecer en realidad y en verdad el patrimonio real y efectivo de los contribuyentes argentinos, quienes, repito, desde 1945 tenían la obligación de declarar en la Dirección General del Impuesto a los Réditos su patrimonio total y sus deudas en el país y fuera de él.

A partir de 1946 se estableció el carácter facultativo de la declaración de los bienes y las deudas en el extranjero. Y desde 1950, en virtud de la política tributaria del régimen, se excluyó por completo del patrimonio real y efectivo del contribuyente la declaración de la tenencia de acciones de sociedades anónimas.

Advierto que la circular general número 264, del 10 de diciembre de 1949, de la Dirección General Impositiva, admite que el aumento patrimonial resultante de la introducción de capital del exterior podría ser acreditada tan sólo por simples indicios o presunciones.

Mas lo efectivo de toda esta política es que no puede haber contralor estatal sobre el contribuyente. Este es el signo y síntoma de la política tributaria de este gobierno. Y no sería sólo que el Estado no puede conocer, en virtud de las propias disposiciones legislativas, el monto de los bienes y de las deudas que los argentinos y los extranjeros residentes en nuestro país tienen en las bancas extranjeras, libradas a la no siempre clara y limpia especulación internacional de los capitales, sino que el Estado no puede saber cuánto tiene cada argentino o extranjero residente en la Argentina, como inversión de su patrimonio en acciones de las sociedades anónimas.

Y hay algo más grave todavía: el control lógico del Estado en cuanto a la evolución económica del contribuyente debería realizarse por la compulsa entre las declaraciones patrimoniales realizadas año a año por el contribuyente, que determinarían esa evolución si se tuviera en cuenta su patrimonio real, efectivo y total.

Esto no es posible hacerlo porque la ley facilita al propio contribuyente la posibilidad de

burlarla por esta política vinculada a la tenencia de acciones de sociedades anónimas. Si no, no bastaría más que recordar que mediante el simple pago de comisiones a corredores de bolsa, que se pueden dejar como constancia de una inversión en acciones, tiene el contribuyente la vía libre para realizar la ocultación de su patrimonio real. Pero no bastaba esta ley, no era suficiente esta ley, cuyas consecuencias para la economía argentina y para la política fiscal ya hemos de reseñar y señalar. Se dictó, entonces, en 1950, la ley que establece la tasa fija de contribuciones para las sociedades anónimas y el sistema innominado, con la imposibilidad práctica de la identificación de los tenedores de acciones.

Pero se necesitaban dos cosas más, y fríamente el gobierno las proyectó y realizó. Era necesario eximir del impuesto a las ganancias eventuales a todos los beneficios obtenidos en la negociación de acciones y de títulos, y se hizo. Y era necesario —porque la muerte, la inexorable muerte, colocaría, entonces, al contribuyente en la situación de poner en evidencia su patrimonio real con las consecuentes derivaciones— crear un impuesto substitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes, y se creó el impuesto correspondiente a cargo de las sociedades. En virtud de las modificaciones a la ley de impuesto a los réditos, el impuesto fijo a cargo de la sociedad equivalía al 24 % de sus rentas anuales. La sociedad retendría el 6 % de todos los dividendos a abonarse. Este actúa sobre el 76 % restante, de manera que era, según la ley de 1950, un impuesto total de 28,56 por ciento. Para las demás categorías de réditos la ley determinaba una escala que llegaba al 40 % para los ingresos anuales superiores al millón de pesos.

Como un reflejo de lo que ello supone, yo desearía ser muy claro en estas enunciacines de cifras, pues ellas establecen la evidencia de la protección de la política impositiva del gobierno a los grandes capitales en detrimento del pequeño ahorrista o del pequeño inversor. Siempre que un rentista obtenga, más o menos, una cifra superior a los 200.000 pesos anuales de beneficio, a cuya altura la escala general del rédito que debe pagarse se aproxima al 28,5 por ciento fijado en virtud de esta ley de 1950 conviene, para eludir la carga impositiva y para pagar menos impuesto, descargar toda la pecunia del contribuyente en las sociedades anónimas. Basta señalar que cuando las ganancias del contribuyente alcanzan al millón de pesos anuales, ese millonario se ahorrará con ese arbitrio el pago al Estado de 90.000 pesos por año, aparte de todas las posibilidades que le ofrece la ley, por ejemplo, en lo que se refiere a fondos de reserva o asignaciones de sueldos como directores, etcétera.

En cambio, el supuesto del inversor que obtenga ganancias por debajo de los 200.000 pesos anuales se presenta completamente a la inversa. Eso estaba salvado en la legislación anterior a 1950 y es lo que constituye la materia de la propuesta del señor diputado Fassi, porque ese pequeño ahorrista va a encontrar en la inversión de su patrimonio en títulos de sociedades anónimas un inmediato aumento en la contribución que debe pagar al Estado.

Para ser concreto y para señalar con alguna cifra esta afirmación que le hemos hecho ayer al señor ministro de Hacienda, de que esta política impositiva del gobierno es para favorecer a los grandes sectores del privilegio argentino y a la nueva clase oligárquica creada en torno de la política peronista, he de decir que, por ejemplo, aquel contribuyente que tenga en sus réditos anuales un pequeño beneficio de unos 30.000 pesos, a los que agrega 10.000 pesos en títulos o acciones, paga al Estado un impuesto que se calcularía en un 10, 12 ó 15 por ciento; por esa inversión en títulos de sociedades anónimas va a pagar, en virtud de esta ley, una suma mucho mayor. En cambio, aquel contribuyente que tenga réditos anuales de un millón de pesos, y de ellos, 900.000 pesos son fruto de acciones de sociedades anónimas innominadas, que no pagarán réditos directamente, sino que lo harán por intermedio de la sociedad a que pertenecen, va a estar pagando de esta manera sumas que he calculado en alrededor de 90.000 pesos anuales inferiores a lo que debiera pagar si el Estado cumpliera con su obligación de identificar en su totalidad el patrimonio real de los contribuyentes.

El segundo punto se vincula al impuesto substitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes.

A partir del 1º de enero de 1951 se eximió del pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes a todas las traslaciones de dominio sobre acciones de sociedades de capital, y en reemplazo se creó un gravamen a cargo de las sociedades, porque aquí lo que interesa es mantener siempre oculto el nombre de quién tiene el dinero, quién es el propietario de las acciones que paga la sociedad y que el Estado nunca sepa quién tiene en el cajón de sus escritorios las acciones, ni cuántas acciones tiene, ni a qué sociedades pertenecen.

La sociedad paga un uno por ciento anual de su capital propio, estableciendo la diferencia entre el activo y el pasivo exigibles. Desde luego, hay numerosos defectos que no tengo tiempo para señalar y que puntualiza un estudio realizado en el Comité Nacional del radicalismo.

El impuesto a la transmisión gratuita incluye el de herencias y el aplicable a donaciones. El substitutivo, en cambio, excluye a éstas de tal manera que la transmisión gratuita por actos

entre vivos está permanentemente exenta, de acuerdo con nuestra legislación, cualquiera sea la frecuencia de su repetición. De esta manera sabemos perfectamente que estas disposiciones han dado origen a la constitución de numerosas sociedades anónimas en donde se ha colocado para fundarlas el haber accionario de los contribuyentes.

En cuanto al tercer punto, que se refiere al impuesto a las ganancias eventuales, podría extenderme en su consideración, señalando las graves características de este proyecto de ley, pero se me ha pasado el tiempo demasiado rápido al tratar los otros aspectos vinculados a la materia.

Mediante el anonimato de esta clase de sociedades de capital se posibilita la ocultación del dinero negro de todas las ganancias ilegítimas y de todos los dineros mal habidos de la República. Como he de pasar muy por encima, porque ya hicimos referencias cuando se hizo el debate sobre radicación de capitales extranjeros, me limitaré a decir que ella también imposibilita en absoluto la identificación de las poderosas fuerzas del capitalismo internacional que han de radicarse en la República. Y si tuviera que señalar un hecho evidente no tendría otro que recordar cómo a raíz de mi denuncia en la Comisión de Presupuesto antes del debate del proyecto de ley sobre radicación de capitales extranjeros, se creó, constituida por funcionarios de los ministerios, una comisión cuyo objeto fue tratar de identificar a las sociedades, al dinero y a los tenedores de títulos de las sociedades extranjeras. Eso será ya imposible y tendrá las consecuencias peligrosas, que indicamos, de ese estado de cosas frente a la tendencia inveterada de los capitales extranjeros y del imperialismo internacional, de penetrar en todos los sectores de la sociedad y de la economía para mantener aherrojados a los jóvenes pueblos de Latinoamérica, como el nuestro.

Hubiera querido extenderme sobre otro hecho grave que se vincula al impuesto a las ventas. El señor diputado Fassi se refirió con elocuencia a lo contradictorio de la política fiscalista del gobierno que hace incidir el peso opresor del Estado frente al consumo de los sectores más menesterosos de la población que en este sentido están en condiciones igualitarias, o por lo menos aproximadas a la igualdad, frente a los sectores más poderosos, porque todos tienen necesidad de consumir.

En este proyecto de ley se contiene algo muy grave que constituye la ratificación de una política del gobierno señalada también en anteriores debates. Ya nuestro compañero de sector, el brillante ex diputado don Arturo Frondizi lo señaló en su impecable acusación en las discusiones de 1950.

En este proyecto se substituye el artículo 10 de la ley vigente por un nuevo artículo en el que se establece que la tasa del impuesto será del 8 por ciento, que se reducirá al 1,25 por ciento en el caso de ventas de petróleo crudo, fuel oil, diesel oil, gas oil, kerosene, tractor, solvente y aguarrás. Este artículo significa que una vez más el Poder Ejecutivo está al servicio de los intereses petroleros extranjeros.

Le pregunté ayer al señor ministro de Hacienda si el Poder Ejecutivo mantenía para este proyecto las enunciaciones de sus proyectos anteriores.

Habrà que recordar que en el año 1934 se dictó la ley 12.143 que fijaba el 1,25 por ciento de impuesto a la venta; que en 1948 la ley 13.343 lo aumentaba un 3 por ciento, y en el mismo año 1948, la ley 13.473 lo aumentó en 3,75 por ciento y se llegó al 8 por ciento. El 18 de mayo de 1949, por decreto 11.716 se eximió del pago de los dos aumentos o sea del 6,75 por ciento, a los derivados del petróleo. Después el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley por el que se establecía una exención para las empresas porque, decía el Poder Ejecutivo, las empresas no obtenían beneficios marginales. En el presupuesto de 1950 —ley 13.558— por el artículo 29 se autorizó al Poder Ejecutivo para suspender el impuesto y los aumentos a las ventas. En la ley 13.925, por el artículo 9º se eximió del aumento del impuesto a las ventas al petróleo crudo, a los derivados del petróleo y al aguarrás, con efecto retroactivo al 1º de enero de 1943.

Tengo aquí las cifras que demuestran la injusta protección que dispensa el gobierno. No he de pedir que se publiquen en el Diario de Sesiones, porque sé que no he de contar con la aprobación de la Honorable Cámara, pero las he de dar en oportunidad de algún debate sobre petróleo, que supongo próximo, en momentos en que están en pleno tren de progreso las transacciones del gobierno con el imperialismo yanqui para establecer la explotación del petróleo argentino. Tengo aquí las cifras —decía— que demuestran esa injusta protección del gobierno, ratificada por este proyecto de ley, frente a los intereses del imperialismo extranjero.

Para terminar —lamentando no poder extenderme sobre este asunto tan importante de la política fiscal tributaria—, digo que sin esfuerzo, una vez más, establecemos cómo este gobierno, que levantó una bandera de lucha contra el privilegio internacional al que llamó Braden, y los sectores del privilegio nacional, llamándolos Secretaría de Trabajo y Previsión, está entregado totalmente, como previsiblemente lo denunció el radicalismo en 1946, a esas

Frente a un proyecto de ley que significa regreso, nosotros levantamos nuestras afirmaciones progresistas y radicales. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Fernández (H. S.). — He de ocuparme del mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo desde dos aspectos fundamentales: el primero, siguiendo el hilo general de algunas ideas que pensaba exponer en particular; y el segundo, para referirme a las críticas que injustamente han esbozado contra el proyecto los señores diputados de la minoría, tratando de colocarse dentro de la línea general de su política de oposición a todo lo que hace el peronismo.

Por el proyecto de ley que tiene a estudio la Honorable Cámara, se introducen substanciales reformas al régimen impositivo de la Nación. Responden ellas, dice el Poder Ejecutivo, a un vasto plan de trascendente contenido social, y se fundan en el sano principio de obtener una equitativa redistribución de las cargas fiscales en relación con la capacidad contributiva de la población, procurándose a la vez alcanzar una incidencia equilibrada de los tributos, sin perjuicio de ampliar con carácter general el ámbito no imponible desgravando en mayor proporción los réditos del trabajo personal y de los consumos indispensables, lo que ha de permitir aliviar la presión tributaria en los sectores más modestos del pueblo argentino.

Todo lo relacionado con las finanzas públicas constituye una materia compleja, delicada y de gran trascendencia, por lo mismo que sus efectos llegan a todos los ámbitos sociales de la Nación, y por cuanto se vinculan también a los diferentes medios pecuniarios que necesita el gobierno para hacer frente a los gastos públicos y demás realizaciones que se proponen, a fin de cumplir fines sociales, políticos, culturales, económicos, etcétera.

De ahí por qué, al reformarse el régimen impositivo, debe procederse con mesura y con profundo conocimiento de las causas y efectos que directa o indirectamente afectan a los intereses públicos, y también al interés de los particulares o, mejor dicho, de la masa de población que deberá afrontar esa carga. Indudablemente, el Estado es el sujeto activo en todo lo relacionado con las finanzas públicas, y tiene, constitucionalmente hablando, la facultad de disponer de *imperium* con el objeto de procurarse los recursos necesarios para afrontar las erogaciones que sus propias actividades requieren; pero al mismo tiempo el Estado es quien debe prever y vigilar para que las cargas no vayan a crear al pueblo dificultades económicas insuperables: debe lograrse al respecto un verdadero equilibrio económico. El impuesto, ha dicho el general Perón, es un instrumento de

gobierno al servicio de la justicia social y de la economía social del país. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Por eso, las reformas que se proyectan al régimen impositivo existente no van a perturbar el proceso de capitalización económica del país, y las desgravaciones introducidas servirán de estímulo al desarrollo de la actividad económica, al bienestar de la colectividad y al engrandecimiento de la Nación.

Asimismo es necesario destacar que si bien se persigue la contención y la parsimonia en los gastos públicos, no puede creerse que con ello se irá hasta atentar contra el crecimiento normal de las instituciones, la grandeza de la Nación o la felicidad del pueblo. Como ha dicho el general Perón, la única y suprema finalidad del segundo Plan Quinquenal es la de asegurar el bienestar del pueblo y la grandeza de la Nación, por lo cual para alcanzar estos objetivos el gobierno y el pueblo tienen que ordenar armónicamente sus actividades sociales, económicas y políticas. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

—Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª de la Honorable Cámara, doña Delia D. Degliuomini de Parodi.

Sr. Fernández (H. S.). — Estas reformas afectan en primer lugar a la ley 11.683, texto ordenado en 1952, denominada «ley de procedimiento». Por la reforma se sostiene el principio de que no se cumple con el Estado sólo abonando los impuestos, sino que ello debe hacerse dentro de los plazos establecidos para asegurar el normal desenvolvimiento de las finanzas públicas: quien no pague a su debido tiempo, debe ser sancionado con severidad. Sin embargo, el proyecto consagra dos franquicias: la de la presentación espontánea, que libera de toda penalidad, y la concesión de facilidades en el pago por causa justificada.

Por el artículo 42 de dicha ley el recargo es del 20 %, cualquiera sea el retardo. Por el artículo 1º del proyecto se modifica el recargo estableciéndolo en forma progresiva: desde un 5 % por el retardo de un mes, el recargo llega a ser del 100 % en el caso de más de cinco años de atraso.

La adopción de una escala es conveniente y justa. Si bien hay muchos morosos que no pagan el impuesto y ocupan el dinero en otras operaciones que les permiten ganar muchas veces más del 20 % del recargo, es evidente que otros no pagan por descuido, y cuando el plazo mínimo de la mora está vencido, ya no tienen ningún interés en cumplir inmediatamente sus obligaciones y dejan pasar el tiempo.

Es digno de mención el agregado al artículo 51, según el cual el fallecimiento del infractor implica la no aplicación de las multas previstas en los artículos 43, 44 y 45 de la ley 11.683.

Por la reforma, prescriben a los cinco años las acciones y poderes del fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por la ley y aplicar y hacer efectivas las multas en ella previstas. Igualmente, la acción de repetición de impuestos prescribe por cinco años.

En los casos de intimaciones notificadas o verificaciones iniciadas con anterioridad al 1º de julio de 1955, serán de aplicación los recargos establecidos en el artículo 42 de la ley 11.683.

La disposición sobre prescripción de la acción de repetición contenida en el inciso 3º de este artículo, no regirá para las prescripciones que de acuerdo con las normas anteriores se hayan operado antes del 1º de enero de 1955; y, de acuerdo con la reforma, para las prescripciones en curso a la fecha indicada se aplicarán las nuevas disposiciones de este proyecto.

La ley denominada de los réditos, 11.682, es alcanzada en parte muy importante por esta reforma; y dada su múltiple aplicación y las críticas a que ha dado origen, y por el hecho de que sus disposiciones se extienden a un vasto sector popular, merece un comentario especial, aunque con ello tenga que abusar de la tolerancia de los señores diputados tomando un poco más de tiempo.

Ha sido temperamento reiteradamente aplicado por el actual Poder Ejecutivo, proteger a las clases económicamente menos favorecidas. Con ese fin, en la reforma que se discute los mínimos no imponibles vigentes de \$ 3.600 anuales para las categorías primera y segunda, y de \$ 6.000 anuales para las categorías tercera y cuarta, se elevan y uniforman en la cantidad de \$ 7.200 anuales. Dicho mínimo no imponible, dice el artículo 20 de esta reforma, se elevará en \$ 2.400 anuales para los contribuyentes que tengan cargas de familia, y la deducción adicional para los contribuyentes que obtengan réditos del trabajo personal, se eleva de \$ 12.600 a 15.000 pesos.

Indudablemente, estas desgravaciones traerán la eliminación de una apreciable cantidad de contribuyentes; pero, por otra parte, disminuirán las tareas de los agentes de retención, puesto que muchos empleados quedarán totalmente liberados. Se producirá una merma considerable en la recaudación del impuesto a los réditos, pero el gobierno peronista, consecuente con su política social de protección al pueblo, afronta esa situación.

Las deducciones en concepto de mínimo no imponible, cargas de familia y adicional para rentas del trabajo personal, se complementan con una reestructuración de la escala progresiva de la tasa del impuesto, con el objeto de aliviar a los pequeños y medianos contribuyentes, iniciando su aplicación en los réditos netos no imponibles que exceden de \$ 10.000 anuales, en lugar del límite vigente de \$ 5.000,

sin que ello eleve el máximo actual, que se mantiene en 33 por ciento.

Esta reestructuración importa un menor desembolso por impuesto a los réditos para todos los contribuyentes con rentas netas imponibles de hasta \$ 80.000 anuales. Su mayor gravitación sobre los que obtengan rentas superiores a dicha suma será muy leve, ya que, en conjunto, la tasa promedio del gravamen no experimenta variaciones.

El artículo 56 de la ley vigente es substituído por el siguiente: «Quedan sujetos al pago de la tasa del treinta por ciento (30 %), que se abonará con carácter definitivo, y sin perjuicio de lo que les corresponda ingresar en concepto de ausentismo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley, los réditos imponibles de: a) Las sociedades anónimas constituidas en el país; b) Las sociedades en comandita por acciones, constituidas en el país, en la parte que no corresponde a los socios solidarios de conformidad con el artículo 50; c) las asociaciones civiles y demás entidades a que se refiere el segundo apartado del inciso f) del artículo 19, en cuanto no corresponda por esta ley otro tratamiento impositivo; d) las sociedades de capital, cualquiera sea su denominación, constituidas en el extranjero que tengan en el país un establecimiento comercial, industrial, agropecuario, minero o de otro tipo, organizado en forma de empresa estable.»

La ley 14.060 autorizó al Poder Ejecutivo para aceptar en el balance impositivo del impuesto a los réditos, amortizaciones extraordinarias sobre rubros del activo fijo, con el fin de ajustar dicho balance a la realidad económica, tratando por tanto, que exprese beneficios reales y no técnicos. En uso de esa facultad, se dictó el decreto 5.802/52, que fijó los coeficientes de aplicación de las amortizaciones ordinarias para calcular las extraordinarias en función de los ejercicios en que los bienes fueron adquiridos. Por el mismo decreto se dispuso que las amortizaciones extraordinarias no tendrían incidencia alguna para el cálculo del capital y de la utilidad gravada por el impuesto a los beneficios extraordinarios.

Razones análogas a las que motivaron la implantación del sistema de amortizaciones extraordinarias mueven hoy el Poder Ejecutivo a reverlo en los siguientes aspectos: monto de los coeficientes admitidos, ejercicios de adquisición de los bienes, y aplicación para impuesto a los beneficios extraordinarios.

Refiriéndonos ahora a la magnitud de los coeficientes extraordinarios diré que se ha considerado prudente aumentarlos en un 75 % aproximadamente con respecto a los fijados en dicho decreto; y en lo que concierne a las adquisiciones susceptibles de beneficiar con dichas amortizaciones, se estima necesario in-

cluir las efectuadas en los ejercicios de 1951, 1952 y 1953, determinando para el primero un coeficiente del 40 %, y para los dos últimos uno del 10 por ciento.

Por las reformas a introducirse las personas de existencia visible y las sucesiones indivisas, mientras no existe declaratoria de herederos o testamento declarado válido que cumpla la misma finalidad, abonarán, como hasta ahora, la tasa básica del 7 % sobre los réditos netos sujetos a impuesto; y cuando esos réditos excedan de 10.000 pesos moneda nacional, los contribuyentes indicados en el párrafo anterior pagarán, además, una tasa adicional progresiva de acuerdo con la escala que se fija; y cuando corresponda el recargo por ausentismo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 25 de esta ley.

Para los particulares y las sucesiones indivisas cuando son sujetos del impuesto, las disposiciones contenidas en el artículo se aplicarán sobre todos los réditos que perciban, se les acrediten en cuenta o se pongan a su disposición a partir del 1º de enero de 1955.

Para las rentas de primera categoría se estará a lo dispuesto por el artículo 17 de la ley 11.682. Para los comerciantes, entidades comerciales o civiles o personas asimiladas a comerciantes por la Dirección General Impositiva esas disposiciones se aplicarán sobre todos los réditos netos que arrojen sus ejercicios anuales, cerrados en el año 1955.

Las entidades citadas en los incisos a), b) y c) del artículo 56 de la ley 11.682, que distribuyan dividendos o utilidades correspondientes a ejercicios cerrados entre el 30 de septiembre de 1950 y el 31 de diciembre de 1954, deberán retener e ingresar a la Dirección General Impositiva, con carácter definitivo, el 6 % sobre dichos dividendos o utilidades.

Para determinar el monto sujeto a esa retención, se seguirá el siguiente procedimiento establecido por la reforma:

- a) de la suma de las utilidades impositivas de los ejercicios aludidos en el párrafo anterior —deducidos los quebrantos si los hubiera— se restarán los importes que, a pesar de estar alcanzados por la ley, no constituyen ganancias; la diferencia constituirá el monto total de los beneficios susceptibles de distribución;
- b) del monto de beneficios distribuibles así determinado, se deducirán los dividendos o utilidades efectivamente repartidos entre el 4 de abril de 1951 y el 31 de mayo de 1955; el remanente representará la utilidad no distribuida, sobre la que deberá practicarse la retención dispuesta precedentemente;
- c) dicha retención se efectuará sobre el importe en que los dividendos que se

distribuyan con posterioridad al 31 de mayo de 1955 excedan la utilidad impositiva de los respectivos ejercicios anuales, hasta la concurrencia del referido remanente.

Los fondos de reposición constituidos en los ejercicios cerrados hasta el 31 de diciembre de 1954, no estarán sujetos al gravamen, cualquiera fuese el destino que se diere a los mismos.

También la ley llamada de beneficios extraordinarios será modificada, en virtud de estas reformas, a partir del 1º de enero de 1955.

El artículo 49 del proyecto substituye el último párrafo del artículo 1º de esta ley, por el siguiente: «Están además exentos los primeros treinta mil pesos moneda nacional (\$ 30.000 m/n.) del beneficio extraordinario determinado conforme a los artículos siguientes.»

Al substituirse los incisos c) y f) del artículo 3º se establece que las empresas individuales y las sociedades en general —excepto las anónimas— podrán deducir los importes que fije el Poder Ejecutivo por cada socio que trabaje efectivamente en el país al servicio de la empresa. Esta deducción alcanza a los socios colectivos de las sociedades en comandita por acciones, pero no a los accionistas. El impuesto a los beneficios extraordinarios será deducible para el cálculo del impuesto a los réditos, pero no para la liquidación del presente gravamen. El impuesto a los réditos no será deducible para la liquidación de ese gravamen. En cambio, se admitirá deducir de la utilidad del año ajustada según las normas de esta ley y de su reglamentación, el porcentaje que fije el Poder Ejecutivo de acuerdo con las variaciones operadas en la tasa promedio del impuesto a los réditos.

Además, el artículo 5º se substituye disponiéndose que el impuesto establecido por las presentes disposiciones se paga anualmente con carácter definitivo. Pero si en alguno de los ejercicios comprendidos dentro de la vigencia de este gravamen, el balance impositivo arrojar quebranto o beneficio inferior al doce por ciento (12 %) del capital y reservas libres, el monto del quebranto más el importe del 12 %, o la diferencia entre el beneficio y dicho 12 % —según el caso—, podrá deducirse hasta la concurrencia del respectivo importe, de las utilidades impositivas de los cuatro ejercicios siguientes.

A los efectos de lo dispuesto en este artículo, no se deducirán ni compensarán en el ejercicio en que se liquida el impuesto las sumas que por los períodos anteriores hubiera correspondido computar en concepto de beneficio extraordinario exento, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 1º.

Y por último, en el mismo artículo se dice que los quebrantos impositivos de ejercicios an-

teriores que, conforme al régimen del texto ordenado en 1952, fueren computables en el balance impositivo correspondiente al primer ejercicio cerrado a partir del 1º de enero de 1955, podrán deducirse de las utilidades de los cuatro ejercicios siguientes, cualquiera fuera el período en el que se hubieren originado.

El artículo 5º del proyecto se refiere a los impuestos a las ganancias eventuales, y las modificaciones por él introducidas se traducirán en un apreciable alivio para los contribuyentes que obtengan beneficios sujetos a dicho impuesto. «En toda venta de inmuebles y automotores se permitirá una deducción adicional equivalente al importe que resulte de aplicar al costo los porcentajes que se indican seguidamente por cada año, a contar de aquel en el cual se efectuó la compra o construcción: 5 % hasta 1945; 10 % desde 1946 hasta 1953, inclusive.»

Esta desgravación, que tiende a compensar el alza experimentada en los valores de los bienes en general y en particular de los inmuebles, permitirá una importante actualización de los costos computables a los efectos impositivos y redundará en una apreciable disminución del impuesto a pagar en el momento de la transferencia.

La reforma también se refiere a la transferencia de los bienes adquiridos por herencia, legado o donaciones. Actualmente se considera valor de costo a los fines fiscales el que tuvo el bien en manos del causante, cualquiera fuera la época en que fué comprado o construido. Al propiciar que en lugar de computar dicho valor se tome el fijado para el pago del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, se persiguen dos propósitos: primero, actualización del valor a considerar para establecer el gravamen, con la consiguiente reducción del importe a pagar; segundo, la unificación de los valores que sirven de base para la imposición con los que en la misma materia rigen para el impuesto a la transmisión gratuita de bienes y para el impuesto a los réditos.

Claramente se destaca en el mensaje del Poder Ejecutivo que la experiencia ha demostrado —y ello es público y notorio— que frecuentemente los vendedores, como sujetos de este gravamen, convienen con los compradores en desfigurar o disminuir el monto de las operaciones, perjudicando en forma apreciable al fisco. Para evitar tales maniobras se agrega al artículo 6º un párrafo en el cual queda perfectamente establecido, que tanto el comprador como el vendedor y las personas intervinientes serán directamente responsables ante la Dirección General Impositiva por el pago del impuesto omitido y de las correspondientes penalidades.

Sobre el particular he hecho llegar a Secretaría una nueva redacción para este párrafo, de modo que en el momento de la votación substituya a la del proyecto.

El Poder Ejecutivo agrega en su mensaje que confía en que no será necesario recurrir a la aplicación de las medidas establecidas en este párrafo, pero que indudablemente servirán a la Dirección General Impositiva y a las autoridades correspondientes para sancionar severamente las evasiones impositivas, ya que si bien el fisco se preocupa por este proyecto de ley de disminuir los gravámenes que deben abonarse, por otra parte está definitivamente resuelto a castigar a quienes se permitan defraudarlo.

También por este artículo se proyecta establecer un tratamiento especial para las primas de emisión de acciones, a partir del 1º de enero de 1955. La prima de emisión, según el concepto que se acepta, es la diferencia entre el precio de colocación o de subscripción de las acciones y el valor nominal. Actualmente se grava con el impuesto la totalidad de la prima; pero en lo sucesivo, merced a la reforma, sólo se gravará la diferencia entre el precio de subscripción, y el valor atribuible a la acción es función del capital efectivo de la empresa, ajustado conforme a las normas del impuesto a los beneficios extraordinarios.

Persigue el Poder Ejecutivo el propósito de aliviar las cargas fiscales que más directamente afectan al pueblo, y por ello, en el artículo 6º, se eximen del gravamen llamado a las ventas a la mayoría de los artículos de consumo general de la población, que se indican en el párrafo segundo, mediante el cual se substituyen los incisos a), d), g), i) y k) del artículo 11 del texto ordenado de la ley.

El inciso a) se refiere a la exención del impuesto para las ventas en el mercado interno de las siguientes mercaderías de producción nacional: ganado, aves y huevos, carne fresca, lanas sucias; cueros secos y salados; plumas sucias, limpias, clasificadas y/o mezcladas; cerdas sucias y lavadas; astas y machos de asta; sebos simplemente derretidos o pisados; leña, carbón vegetal, carbonilla y hulla de carbón vegetal; cereales y oleaginosos, hortalizas, legumbres y frutas frescas; semillas y bulbos; harinas de trigo, maíz y centeno; fideos; afrecho y afrechillo; pan, galleta común y productos similares de panadería; azúcar de caña y de remolacha; productos frescos de la pesca; jabones, dentífricos, sueros y vacunas; ladrillos y bloques premoldeados de hormigón; cal, arena y canto rodado; sal fina y sal gruesa; productos de las explotaciones mineras en su estado natural, en bruto o molidas, y los concentrados; hielo común; leche fresca y pasterizada, crema, manteca y queso; miel de abejas; aceites comestibles; manutención preparada para animales; productos de granja elaborados dentro de un régimen de trabajo familiar, y en general los productos de la ganadería, de la agricultura y forestales en tanto no hayan sufrido elaboración

o transformación en indispensables para su conservación en estado natural o acondicionamiento.

Me he permitido enunciar en detalle esta cantidad de artículos de primera necesidad, que están expresamente establecidos en uno de los artículos de la reforma, precisamente para refutar a los señores diputados de la oposición, que tan acerbamente se han referido a la misma, pretendiendo que los impuestos indirectos, o sea los que gravan el consumo, son los únicos que el Poder Ejecutivo tiende a aumentar.

Quiero destacar especialmente que esa afirmación es totalmente inexacta, porque hay una enorme cantidad de artículos que hacen a las necesidades imprescindibles de la población y que están exentos del impuesto a las ventas.

Lo real es que en todos los tiempos —y en éstos también— ha sido menester, para poder solventar las necesidades públicas, aplicar algún gravamen a estos artículos de primera necesidad, pero ello no quiere significar en modo alguno que el gobierno peronista esté dispuesto a gravar tan sólo los artículos de primera necesidad, desgravando a la población de los impuestos directos.

Se ha manifestado en la Cámara que están gravados artículos como el calzado, el vestido y otros indispensables. Yo preguntaría a los señores diputados de la oposición, que piden siempre que el Poder Ejecutivo reduzca estos impuestos, si podríamos llegar a desgravarlos totalmente y, siguiendo sus teorías o sus propósitos, desgravar toda clase de réditos.

Sr. Fassi. — De ningún modo. No nos haga decir lo que no hemos dicho.

Sr. Fernández (H. S.). — Yo les preguntaría a los señores diputados con qué se haría frente a las necesidades que imponen al Estado el pago de sueldos de la administración, la atención de las obras públicas y de toda otra clase de servicios.

Sr. Nudelman. — Con la autorización de la Presidencia, ¿me permite una interrupción el señor diputado?

Sr. Fernández (H. S.). — ¡Cómo no!

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Nudelman. — Señora presidenta: Está equivocado el señor diputado.

No creemos en la necesidad de desgravar todos los renglones susceptibles de justa tributación.

No obstante algunas afirmaciones doctrinarias, creemos que el impuesto a los réditos es uno de los impuestos más legítimos, pero como lo han señalado algunos compañeros de sector, creemos que es injusto que se grave a las clases más humildes del país y se establezca la desgravación para las ganancias que exceden del millón de pesos anuales, favoreciendo así a los grandes millonarios y a las grandes empresas y sociedades anónimas, a la vez que fo-

mentando la capitalización de los privilegios, que en este régimen pululan a costa de la miseria y del dolor del pueblo argentino.

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Fernández (H. S.). — La manifestación del señor diputado no nos lleva a nada útil. Yo he recalcado que los impuestos directos son en gran parte desgravados para una masa enorme de la población, pero eso no quiere decir que deban suprimirse los impuestos indirectos, que constituyen una fuente de recursos indispensable.

Deseo poner especialmente de relieve que la política del general Perón ha creado una cierta holgura en amplios sectores de la población, que son precisamente los que más beneficios reciben de la obra social, de las obras públicas y de los servicios públicos que debe dirigir y fomentar el Poder Ejecutivo. Entonces, lógicamente, ese vasto sector de la población que ha recibido tantos beneficios debe contribuir también al sostenimiento de la Nación. No es posible que por querer hacer política se diga que los obreros no tienen, como los demás habitantes de la Nación, la obligación de contribuir —con las limitaciones establecidas por la ley— al sostenimiento de los grandes gastos del país. Unos y otros deben sostener a la Nación; y si nuestra política, como he dicho, ha sido favorable en todo instante y en toda forma para las clases que tienen menos bienes materiales, ello no quiere decir que las finanzas del país deban sostenerse solamente con lo que se le saque a los que poseen grandes capitales.

Este es un país joven, nuevo, donde necesariamente debemos proteger no solamente a los capitales que existen en la República, sino también a aquellos otros que quieran venir a radicarse para propulsar el progreso del país y cumplir fines de utilidad social. Podría decir a los señores diputados que casi no puede haber interés en gravar especialmente a los grandes capitales, porque en el país solamente existen 14 ó 15 firmas que pueden obtener réditos mayores al millón de pesos anuales.

Sr. Perette. — ¿Me permite una interrupción el señor diputado, con la autorización de la Presidencia?

Sr. Fernández (H. S.). — Sí, señor diputado.

Sra. Presidenta (Degliuomini de Parodi). — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Perette. — Me imagino que el planteo que está haciendo el señor diputado con respecto a los capitales extranjeros no significa aceptar la tesis de que el gobierno debe apuntalar dichos capitales para que vengan a apoderarse de la explotación del petróleo argentino, como lo anunció mister Odium hace seis días en Estados Unidos. Entiendo que es un deber

de la República, del Parlamento y del gobierno argentinos defender la nacionalización del petróleo y ponerlo a salvo de cualquier negociación con cualquier empresa particular, extranjera o argentina, ya que el petróleo no puede entrar en el planteo que formula el señor diputado, pues no se puede hacer una enunciación indiscriminada sobre cualquier explotación foránea de los intereses y bienes de la República.

— Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Antonio J. Benítez.

Sr. Presidente (Benítez). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Fernández (H. S.). — No es posible que tangencialmente se traiga una cuestión ajena al asunto en debate —y que ello me obligue a contestar—, como es la del petróleo, a la que tantas veces se ha referido el señor diputado. Cuando llegue el momento oportuno le daremos las razones que tenga el Poder Ejecutivo para dictar las medidas que se consideren pertinentes.

Yo me he referido exclusivamente al hecho de que este es un país nuevo, que no puede perseguir sino que debe fomentar el ingreso de capitales para cimentar la grandeza de la Nación. En segundo lugar, debe tenderse a una mayor capitalización, indispensable para fomentar nuestra industria, que es todavía incipiente. Otros países, con una poderosa industria muy evolucionada, podrán gravar a esos capitales, pero entre nosotros esa política sería errónea, porque lo primero que busca y pregunta el inversor de capitales es el interés que puede obtener en cualquier industria.

Entonces, no debemos ser ingenuos y dejarnos llevar por un idealismo que no es aplicable en un país como el nuestro, sino que debemos ser serenos y permitir que vengan esos capitales en la medida que sea necesario, vigilándolos como hace el Poder Ejecutivo. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

La política del actual Poder Ejecutivo es clara. En todo momento ha tratado el Poder Ejecutivo de defender los intereses del país; y cuando una empresa capitalista no ha querido entender lo referente a los beneficios otorgados por nuestras leyes obreras, en más de una oportunidad las ha hecho entrar por el camino de la ley; pero eso no quiere decir que debamos perseguir a los capitales extranjeros no dándoles garantías como se hace en otros países.

Sr. Perette. — Nadie sostiene la persecución al capital extranjero. He sostenido la necesidad de discriminar cuando los capitales vengan a actuar sobre intereses fundamentales, como son la energía eléctrica, el petróleo y toda esa riqueza cuya explotación debe estar a cargo exclusivo del Estado.

Sr. Fernández (H. S.). — Estamos defendiendo, en el aspecto impositivo, la cuestión de la energía, todos los artículos de primera necesidad, y todas aquellas cosas que hacen que el pueblo viva mejor y se sienta menos gravado por las distintas cargas públicas; pero eso no quiere decir —insisto— que amplios sectores de la población no deban contribuir al sostenimiento de todos los medios de aplicación necesarios para que este gobierno pueda cumplir sus planes de beneficio colectivo. El señor diputado estará conmigo en que en todas las épocas y durante todos los gobiernos en este país se ha gravado, y no en forma tan liviana como se hace actualmente, a los artículos de primera necesidad. Es innegable que los impuestos sobre los artículos de primera necesidad siempre han sido una poderosa fuente de recursos para el gobierno. Nuestro Poder Ejecutivo se ha visto en la obligación de tener que insistir un poco, durante cierto tiempo, en esos impuestos, aunque comprendiendo que paulatinamente es necesario desgravar a los artículos que son esenciales para la masa de la población.

Sr. Nudelman. — Si me permite el señor diputado...

Nos llama la atención que se insista con esta desgravación del petróleo precisamente en un momento en que se está tramitando el contrato de entrega, sobre la materia que hemos anunciado mucho tiempo atrás, entre Jorge Antonio, representante de los intereses del gobierno argentino en la empresa, y la Atlas Corporation, con el asentimiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, según ha declarado la prensa del extranjero, en tanto que los diarios de la cadena oficial deliberadamente han ocultado el nombre de este señor Jorge Antonio...

Sr. Fernández (H. S.). — Le vuelvo a decir al señor diputado que, llegado el momento, discutiremos todo lo que quiera sobre el petróleo.

Sr. Presidente (Benítez). — La Presidencia ruega al señor diputado por San Luis que continúe su exposición sin admitir interrupciones.

Sr. Fernández (H. S.). — También están exentas las ventas efectuadas a las cooperativas de consumo constituidas de acuerdo a la ley 11.388 e inscritas como tales en el Ministerio de Comercio, la venta de libros, diarios, periódicos y revistas, el suministro de servicios públicos de gas, electricidad y similares —y aquí está el aspecto a que se refería recién el señor diputado—, las ventas de estos mismos productos a empresas que presten tales servicios y las ventas de papel destinado a la impresión de libros, diarios, periódicos y revistas.

Varias reformas se introducen por el artículo 79 del proyecto en la ley llamada de impuestos internos, y ellas tienen por fin particular una mejor redistribución del gravamen, ha-

ciéndolo más equitativo ajustando la técnica de su aplicación para evitar las evasiones.

Las modificaciones que se proyectan a los artículos 31 y 35 que autorizan al Poder Ejecutivo para aumentar las alícuotas vigentes en materia de cigarrillos, cigarros y tabacos persiguen fundamentalmente facilitar el ajuste de los precios de dichos productos para compensar los mayores costos de producción determinados por las mejoras de sueldos y salarios fijados en los nuevos convenios suscritos.

Esto lo decimos, señores diputados, con toda entereza ya que no tenemos por qué ocultar que hay necesidad de gravar un poco más los cigarros y cigarrillos. Ha habido necesidad de dar mejoras sociales y aumentar los sueldos. Como los obreros han obtenido ventajas es lógico entonces que el Poder Ejecutivo se vea obligado a gravar un poco más los cigarrillos. Ello no significa, como decía el señor diputado Fassi hace un momento, que el pueblo de la Nación no va a poder fumar. Yo preguntaría qué obreros se van a quejar de eso si ellos ganan bien, cobran sueldos remunerativos y, en consecuencia, deben contribuir en una mínima parte para afrontar gastos que se consideran indispensables.

Dejo así contestadas las manifestaciones del señor diputado Fassi en cuanto se refieren a este asunto.

El alcohol etílico de cualquier procedencia u origen pagará en concepto de impuestos internos por litro y por cada gramo centesimal a la temperatura de 15° centígrados una tasa básica de 0,3 pesos y una tasa adicional de 0,85 pesos.

Están excluidos de la tasa adicional, dice el mismo artículo, los alcoholes destinados al encabezamiento de vinos en bodegas hasta el límite máximo que establezca la reglamentación, y están exentos del impuesto —tasa básica y adicional— los alcoholes que utilicen en preparaciones medicinales o veterinarias de uso interno los establecimientos que reúnan las condiciones requeridas por el Poder Ejecutivo en la proporción que el mismo determine.

Los vinos importados de más de 13 grados de alcohol deben tributar el impuesto a razón de \$ 0,03 por litro y por grado que exceda de dicho límite.

Los vinagres exportados deben pagar un impuesto de 20 centavos por litro o fracción; y los vinos compuestos, vermutes, guindados y similares pagarán por cada envase de capacidad hasta 50 centilitros 65 centavos, y los de capacidad de más de 50 centilitros, hasta 1 litro, pagarán \$ 1,30 moneda nacional.

Los artículos suntuarios abonarán en concepto de impuesto interno la tasa del 5 % en cada una de las etapas de su comercialización.

Están sujetos a este gravamen: las piedras preciosas o semipreciosas, naturales o reconstituídas, lapidadas, piedras duras talladas y per-

las naturales o de cultivo, se encuentren sueltas, armadas o engarzadas; los objetos para cuya confección se utilicen en cualquier forma o proporción platino, paladio, oro, plata, porcelana, cristal, jade, marfil, ámbar, carey, coral, espuma de mar o cristal de roca; las monedas de oro o plata con aditamentos extraños a su cuño; las prendas de vestir con individualidad propia confeccionadas con pieles de peletería; los tapices y alfombras confeccionados a mano.

Es decir, que se gravan algunos artículos de lujo, no todos, porque hay muchos que efectivamente podrán ser utilizados por el pueblo en general, pero otros, que reúnen características especiales que el Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación, lógicamente deben pagar el impuesto.

Puedo adelantar que el monto total que se ha recaudado por este impuesto en los últimos años es relativamente importante.

En las condiciones que reglamente el Poder Ejecutivo podrán quedar exentos de este impuesto, cualquiera sea el material empleado en su elaboración, los objetos que por razones de orden técnicoconstructivo integren el instrumental científico; los ritualmente indispensables para el oficio religioso público; los anillos de alianza matrimonial; las medallas que acrediten el ejercicio de la función pública u otras que otorguen los poderes públicos; los distintivos, emblemas y atributos usados por las fuerzas armadas y policiales; las condecoraciones oficiales; las prendas de vestir con adorno de piel, y la ropa de trabajo.

Con el propósito de fomentar las construcciones de viviendas y cumplir los enunciados del Poder Ejecutivo en reiterados mensajes, así como los principios del segundo Plan Quinquenal, en la presente reforma se incluyen algunas modificaciones a la ley de contribución inmobiliaria.

Por la ley 14.273 el Poder Ejecutivo estaba autorizado para diferir la revaluación de los inmuebles que debía practicarse en 1953. Ello se fundó en la necesidad de evitar un aumento del impuesto que iría a incidir en la economía de los propietarios en circunstancias en que los alquileres aun se hallan congelados. Esa prudente disposición es completada con la reforma al artículo 21 de la ley, en cuya virtud se rebaja en un 6 % la tasa de la contribución correspondiente a los inmuebles edificados, habilitados o revaluados (por haberse efectuado ampliaciones o nuevas construcciones) desde el 1º de enero de 1952.

Asimismo se exime por diez años del total del mayor gravamen que pudiera corresponderles, a las construcciones efectuadas bajo el régimen del decreto 14.465/47, y se exime de una tercera parte de la contribución inmobiliaria (parte correspondiente al impuesto territorial) a las construcciones de análoga natura-

leza que se realizaron con posterioridad a la vigencia del decreto 14.465 de 1947.

Quiero dejar expresamente aclarado que se trata solamente de la tercera parte del impuesto. En algunas provincias, como en Buenos Aires, se exime de todo el impuesto territorial, pero en la Capital Federal las cosas son distintas, ya que aquí, por ese concepto de contribución inmobiliaria, no sólo se cobra el impuesto de contribución directa, sino también lo que corresponde por obras sanitarias y por impuestos municipales.

De acuerdo con esta reforma, y en la misma proporción, con el objeto de contribuir al fomento de la construcción de nuevas viviendas, se exime de $\frac{1}{3}$ de la contribución inmobiliaria por el término de cinco años a las propiedades urbanas destinadas a vivienda propia y a las unidades construídas bajo el régimen de propiedad horizontal, cuya valuación fiscal no supere el importe que fije la reglamentación, y siempre que sean habitadas por sus dueños. Esta exención regirá a partir del 1º de enero de 1955.

Se agrega además en el artículo 35 que en los casos de división de edificios para su venta bajo el régimen de la propiedad horizontal, ese hecho no dará lugar a la rectificación de la valuación fiscal vigente, la que se prorrateará entre las distintas unidades conforme al índice que determine la dirección.

Déjanse sin efecto, a partir del 1º de enero de 1955, las revaluaciones practicadas bajo el régimen de propiedad horizontal, a las que se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior. Es decir que deberá sólo cobrarse la parte proporcional de la antigua contribución directa de todo el edificio y no el valor asignado a cada unidad al hacerse la división para la venta por el régimen de la propiedad horizontal.

Consecuente con la política de promover la construcción de viviendas, se eleva del 20 ‰ al 30 ‰ la alícuota que deben pagar los terrenos baldíos.

La denominada ley de sellos también es alcanzada por una serie de reformas que persiguen tres propósitos principales: simplificar el régimen de aquellos gravámenes cuya aplicación ha suscitado dificultades o promovido controversias, suprimir y actualizar algunas alícuotas diferenciales cuya existencia no responde a razones justificadas, y coordinar los procedimientos administrativos y judiciales que se siguen en materia de sellos.

Entre esas muchas modificaciones, citaré la modificación del artículo 60 en cuanto determina como impuesto fijo el de diez centavos a los cheques que no circulan fuera de la plaza de su emisión, y los librados por los bancos a la orden de un tercero y a cargo de sí mismos y a los duplicados de notas de créditos.

Los recibos de dinero, de cheques y giros, y en general cualquier constancia que exteriorice la recepción de una suma de dinero consignada en un documento privado, sus duplicados y demás ejemplares, abonarán el siguiente impuesto de más de 20 pesos hasta 100 pesos, veinte centavos; de más de 100 pesos hasta 500 pesos, cincuenta centavos; de más de 500 pesos a 1.000 pesos, un peso; de más de 1.000 pesos a 5.000 pesos, dos pesos; de más de 5.000 hasta 50.000 pesos, tres pesos; y de más de 50.000 pesos en adelante, cinco pesos.

El impuesto a los recibos será pagado por el otorgante, estando a cargo de los que recaben los duplicados y demás ejemplares el gravamen correspondiente.

Los giros internos pagarán a su presentación, o hasta cinco días, un impuesto igual al de la escala anterior.

Igualmente están sujetos al mismo impuesto los cheques de plaza a plaza, y todos los demás documentos que impliquen transferencia de fondos.

Hay muchas otras reformas que hacen a una serie de medidas que ha aconsejado la práctica y experiencia de la Dirección General Impositiva, la cual con celo y dedicación de los funcionarios que la dirigen aplicará la doctrina y la orientación del gobierno, tratando por todos los medios de practicar la realización de dichos planes de gobierno, que, por cierto, siempre requieren al Estado un serio esfuerzo financiero. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

Bien se ha dicho que el impuesto constituye el medio más poderoso que tiene el Estado para formar el Tesoro público. Además, en función económica, el impuesto unas veces hace la distribución de la riqueza, y, otras, favorece las industrias.

En este aspecto también ha sido criticada la política que sigue el actual Poder Ejecutivo, diciéndose que en este proyecto se grava a un determinado sector de la población, y que deberá ser distribuida la riqueza nacional en forma imparcial, porque solamente algunos son los favorecidos.

Esa crítica es inexacta y fuera de lugar.

Al referirme a otros impuestos he dicho que precisamente el pensamiento del Poder Ejecutivo ha sido favorecer a las clases menos pudientes, pero sin perseguir a las que tienen bienes materiales y mucho menos a los capitales que se dedican a trabajar y a hacer la grandeza del país. En la distribución de la riqueza hay la misma absoluta equidad, y el Poder Ejecutivo nacional, siempre vigilante y celoso de los intereses del pueblo, desgrava y ayuda, pero sin excesivos privilegios que podrían significar situaciones inalcanzables para otro sector. (*¡Muy bien! ¡Muy bien!*)

En países como el nuestro, en que la justicia social es la premisa fundamental de las obras

de gobierno, el impuesto desempeña eficazmente una función social de adecuado equilibrio, redistribuyendo ordenadamente la riqueza entre la población. De ahí que las reformas que contiene el proyecto tienden en particular a la exención de impuesto a los artículos de más amplio consumo popular; a la exención de impuesto a los réditos mínimos; en cuanto es posible, a los réditos del trabajo personal a ciertas formas económicas, cooperativas, mutualidades, entidades de obra social para construir vivienda y, por último, gravando los baldíos.

Para terminar —ya la discusión de este proyecto se está dilatando, a pesar de ser pocas y muy claras las innovaciones que trae, porque lo único que hace es cambiar un régimen establecido por leyes anteriores adecuándolo a los tiempos que vivimos—, voy a citar las ventajas que representa sobre el sistema vigente en materia de imposición a las sociedades de capital: a) promover el ingreso al país de capitales extranjeros que buscan refugio de inquisiciones fiscales; b) fomentar el reintegro al país de capitales argentinos radicados en el extranjero; c) suprimir los engorrosos y complejos trámites que exige la individualización de los tenedores de acciones que ahuyentaban de las inversiones mobiliarias a los pequeños ahorristas y a los capitalistas extranjeros; d) aumentar la recaudación fiscal, pues el 30 % que pagan las sociedades de capital sobre su utilidad es superior a la base promedio que abonan las personas físicas; e) facilitar la fiscalización, toda vez que ésta se reduce a controlar a las sociedades anónimas, prescindiendo de sus componentes; f) al capital extranjero no le conviene mantenerse oculto (imposibilidad de remesar utilidades en divisas).

En materia de política impositiva, conforme al precepto constitucional de la equidad y la proporcionalidad como base de los impuestos y de las cargas públicas, el segundo Plan Quinquenal en su objetivo fundamental precisa expresamente que el impuesto es un instrumento de gobierno. Se despoja así al impuesto del carácter simplista de un mero recurso con finalidad fiscal para elevarlo a la más alta categoría de factor encargado de servir a los superiores propósitos de la justicia social y la economía del país. Y complementando el concepto, se dice que establece la distribución de las cargas fiscales en forma equitativa.

Porque la función de gobernar en los Estados modernos es una tarea que va adquiriendo un mayor carácter científico, a medida que la evolución general en cada nación plantea problemas de una creciente complejidad. Por eso, afrontar esos problemas y resolverlos, no puede ser sino una obra de conjunto, la cual necesita una planificación que aborde racionalmente los diversos aspectos de la labor general y que sobre la base de estudios estadísticos de las necesidades vitales proponga un programa de tra-

bajo para ser ejecutado durante un plazo determinado. Hay un ideal primordial que inspira esta obra, que es consolidar la independencia económica para asegurar la justicia social y mantener la soberanía política. Esta es la meta, como dice el general Perón, hacia la que deberán marchar unidos el gobierno, el Estado y el pueblo argentinos. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

Por todo ello, pido a mis colegas, en nombre de la mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y del bloque peronista, el voto favorable para el proyecto de ley que está a consideración de la Cámara. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos prolongados. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Vergara. — Pido la palabra, para formular una moción de orden.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Vergara. — Como el proyecto ya ha sido debatido ampliamente, hago indicación de que se cierre el debate.

Sr. Nudelman. — Si se cierra el debate tendremos que hablar en la discusión en particular.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar la moción de que se cierre el debate.

— Resulta afirmativa de 85 votos; votan 94 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar si se incorpora al Diario de Sesiones la inserción solicitada por el señor diputado por Santa Fe.

— Resulta afirmativa de 90 votos; votan 94 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Se hará la inserción solicitada (1).

Se va a votar en general el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

— Resulta afirmativa de 86 votos; votan 94 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración en particular.

Por Secretaría se va dar lectura del artículo 19.

Sr. Alonso. — Tenemos en nuestras bancas el texto impreso del proyecto de ley; propongo que se voten los artículos, omitiéndose la lectura del texto.

Sr. Presidente (Benítez). — Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

Sr. Presidente (Benítez). — Se prescindirá de la lectura del texto de los artículos.

En consideración el artículo 19.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 90 votos; votan 98 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el artículo 29.

Se va a votar.

Sr. Nudelman. — Pido la palabra.

— Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Nudelman. — ¿Para qué se enuncian los artículos si no se concede el uso de la palabra?

Sr. Alende. — Si se impide la discusión en particular, no vamos a votar.

Sr. Nudelman. — Procediendo en esta forma, podrían votarse a libro cerrado todas las leyes.

Sr. Presidente (Benítez). — Han hablado ya dos señores diputados del sector de la minoría.

Sr. Alende. — Eso no tiene nada que ver con la discusión en particular.

Sr. Nudelman. — Se está violando el reglamento.

Sr. Alende. — No es correcto impedir las deliberaciones en particular.

— Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Benítez). — La Presidencia consultará a la Honorable Cámara sobre si estima que es correcto su proceder.

Se va a votar si es correcto el proceder de la Presidencia.

— Resulta afirmativa de 90 votos; votan 99 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar el artículo 29.

— Resulta afirmativa de 91 votos; votan 96 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el artículo 39.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 91 votos; votan 96 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el artículo 49.

Se va a votar.

— Resulta afirmativa de 92 votos; votan 94 señores diputados.

Sr. Alonso. — Hago indicación de que el artículo que no se observe se dé por aprobado.

Sr. Presidente (Benítez). — Si hay asentimiento, así se hará.

— Asentimiento.

Sr. Presidente (Benítez). — Se darán por aprobados los artículos no observados.

En consideración el artículo 5º.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el artículo 6º.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el artículo 7º.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el artículo 8º.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el artículo 9º.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el artículo 10.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el artículo 11.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el artículo 12.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el artículo 13.

—Se aprueba.

Sr. Presidente (Benítez). — En consideración el artículo 14.

—Se aprueba.

—El artículo 15 es de forma.

Sr. Presidente (Benítez). — **Queda sancionado el proyecto de ley (1).**

Sr. Alonso. — Pido la palabra, para formular una moción de orden.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Alonso. — Hago moción de que se autorice a la Presidencia a girar a las respectivas comisiones los distintos asuntos a medida que vayan teniendo entrada.

Propongo, asimismo, que se autorice a la Presidencia a comunicar al Honorable Senado las sanciones que vaya produciendo la Honorable Cámara en el curso de esta sesión.

Al mismo tiempo, hago moción de que se pase a cuarto intermedio para reanudar la sesión mañana a la hora habitual.

Sr. Presidente (Benítez). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fassi. — Sin perjuicio de expresar la protesta de mi sector por la manera como fué votado en particular el proyecto de ley que acaba

de sancionarse, quiero manifestar mi disconformidad con la citación a sesión para el día de mañana.

El bloque que represento entiende que no es posible sesionar mañana cuando todavía las comisiones no han despachado ninguno de los proyectos que son motivo de la convocatoria a sesiones extraordinarias. Esto significa que nos veremos constreñidos a estudiar con precipitación, y sin la debida profundidad, los temas que habrían de tratarse en la sesión de mañana. Deseamos mayor pausa y mayor reflexión con respecto a los temas que deben ser debatidos por este cuerpo. Además, interpretando el sentimiento de la mayoría de los componentes de esta Honorable Cámara, no puedo dejar de recordar que mañana se celebra una festividad religiosa que la mayor parte de los señores diputados querrán cumplir.

—Varios señores diputados hablan simultáneamente.

Sr. Presidente (Benítez). — La Presidencia se permite recordar que la Honorable Cámara ha resuelto sesionar diariamente, de manera que el señor diputado por la Capital podría concretar su indicación proponiendo que no se llame a sesión en el día de mañana.

Sr. Fassi. — Hago moción de que no se llame a sesión en el día de mañana.

Sr. Miel Asquía. — Nosotros no aceptamos las expresiones del señor diputado de la minoría; lo que haya dicho será con relación a su sector, pero no al nuestro. Y para el mejor ordenamiento de la labor legislativa creemos que debe mantenerse la resolución de celebrar sesiones diarias.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar la moción de que sean girados directamente a las comisiones los asuntos entrados.

—Resulta afirmativa de 95 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente. (Benítez). — Se va a votar si se autoriza a la Presidencia a comunicar las sanciones de la Honorable Cámara a medida que se vayan produciendo en la presente sesión.

—Resulta afirmativa de 95 votos; votan 100 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar la moción de que no se llame a sesión en el día de mañana.

—Resulta negativa de 90 votos; votan 101 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Se va a votar la moción de que se pase a cuarto intermedio.

—Resulta afirmativa de 92 votos; votan 102 señores diputados.

Sr. Presidente (Benítez). — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 12 y 30.